UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

**LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA SIKUANI DEL
RESGUARDO CAÑO OVEJAS EN MAPIRIPÁN (META)**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE MAGISTER EN CIENCIAS
ECONÓMICAS**

PRESENTADO POR:

ANDRÉS GUSTAVO ROMERO QUIÑONES
andresromeroq@gmail.com

DIRECTOR:

Eco. ALVARO ANDRES VERNAZZA PAEZ MSc

CODIRECTOR:

DR. OSCAR ARCOS PALMA

**UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FACULTAD DE ECONOMÍA
MAESTRIA CIENCIAS ECONÓMICAS
BOGOTA, 30 DE SEPTIEMBRE 2015**

RESUMEN

El caso que se analizará tiene que ver con el inicio del proceso de restitución y de derechos territoriales del pueblo Indígena Sikuani. Un territorio ancestral sobre el cual existe un gran interés expansionista por parte de empresas multinacionales con la idea de desarrollar grandes proyectos agroindustriales, específicamente en la zona de Mapiripán (Meta), por lo cual el estudio evalúa cual ha sido el papel del Estado Colombiano en la protección efectiva de los derechos de las comunidades indígenas, y el reconocimiento de estas comunidades en su territorio, en el cual desarrollan su cultura su economía ancestral y su proyecto de vida, en el marco de los procesos de delimitación territorial, y el reconocimiento del derecho a la propiedad, posesión y uso de las tierras y territorios ocupados ancestralmente de forma colectiva como forma fundamental de permanencia y supervivencia de la comunidad.

Palabras Claves: Restitución de tierras, comunidad Sikuani, derechos indígenas

Abstract

Sikuani population, a Colombian indigene tribe, has been living for years in an ancestral territory, lately some Global Economic Conglomerates and some other local groups has been interested in develop new agribusiness projects in those territories, specifically in Mapiripan (Meta). This essay works over the base of the territorial rights of them and the current land restore process actually being carried out in Colombia, and in general the rights protection to the indigene population that Colombian State as the most important stakeholder in the subject has to face; This having in account these communities develop their entire life over the base of those territories which has been occupied historically for them as a collective form of tenure and which more than a land has been consolidated as a holder of a cultural and ancestral traditions which is in some way the root of the whole community survival.

Keywords: Land restore, Sikuani community, Indigene rights

Introducción

La apertura económica y la liberalización de regímenes de inversión como resultado de la globalización, están generando profundas transformaciones socioeconómicas y procesos de reordenamiento territorial en los ámbitos regionales y locales. Nuevos desarrollos mineros y petroleros, agroindustriales, portuarios y de vías de comunicación están afectando los territorios indígenas, ecosistemas frágiles únicos y áreas naturales protegidas ricas en recursos estratégicos como la biodiversidad. (Echavarría, 2001)

Por otra parte, la violencia en Colombia y otros factores socioeconómicos han vulnerado significativamente el derecho fundamental al territorio del que son titulares las comunidades étnicas, fenómenos como el desplazamiento forzado y los intereses económicos en determinados territorios han ocasionado la pérdida, la afectación y el abandono de territorios indígenas, además de la fragmentación de sus redes familiares y sociales.

Adicional a lo anterior, la omisión en el cumplimiento de las responsabilidades, por parte de las instituciones gubernamentales competentes en el Estado Colombiano, aunado a las acciones de los grupos armados ilegales, atenta directamente contra los derechos fundamentales a la vida digna, la identidad, el territorio en calidad de resguardo, la consulta previa e informada, la jurisdicción especial indígena, la salud, la educación, vivienda digna y alimentación de la comunidad indígena Sikuni de Caño Ovejas facilitando su despojo, por los distintos actores.

Tal como lo menciona, la sentencia T-374/14 de la Corte Constitucional de Colombia, y el Decreto Ley El Decreto Ley 4633 de 2011, para lograr una protección efectiva de los derechos de las comunidades indígenas, es necesario que el Estado, en primera medida, reconozca a las comunidades indígenas y tribales un territorio colectivo en el que desarrollen su cultura y su proyecto de vida, y en segunda medida, garantice, en el marco de los procesos de delimitación territorial, exploración y explotación de recursos naturales en tierras comunales, la participación de los interesados en la adopción de medidas tendientes a desarrollar y garantizar las formas de vida de los miembros de las comunidades indígenas, a partir del reconocimiento de su concepto dinámico de territorio. Por esta razón, el reconocimiento del derecho a la propiedad, posesión y uso de las tierras y territorios ocupados ancestralmente de forma colectiva es fundamental para su permanencia y supervivencia.

La técnica de investigación utilizada hace alusión al proceso de investigación cualitativa donde se contó con registros narrativos de los fenómenos estudiados mediante técnicas como las entrevistas no estructuradas, identificando la naturaleza profunda de las realidades estudiadas, su sistema de relaciones y su estructura dinámica (Pérez, 2002),

Se trata de una técnica por medio de la cual se obtuvo información sobre el tema, proceso o experiencia a través de la indagación a un determinado informante. (Lopez & Deslauriers 2011). Para efectos de la realización de la entrevista, se recurre al muestreo no probabilístico que no yace sobre el azar, sino que es intencional; en otras palabras se trató de reproducir lo más fielmente a la población, teniendo en cuenta sus características conocidas. (Patton 1980:100-105)

Las entrevistas se centraron en dos líderes de la comunidad Sikuni, que son los señores José Díaz Mesa y Manuel Tovar Guerrero quienes han sido los líderes de la comunidad por los últimos 7 años, y que son las personas que hablan español dentro de la comunidad, ya que al intentar realizar entrevistas a los demás habitantes de la comunidad, solo manejan el idioma nativo, y no cuentan con la autorización del líder para conceder la entrevista.

Se realizaron alrededor de 6 entrevistas, con testimonios libres, indagando por casos específicos que han generado mayor controversia entre los colonos y la comunidad Sikuni, y posteriormente sobre los casos de las empresas que hacen presencia en la región, las cuales se presentan en la actualidad como una amenaza para los derechos y la cultura ancestral de la comunidad.

El trabajo está estructurado en el siguiente orden: en la primera parte se adelantará un diagnóstico sobre los determinantes que generaron la expropiación de tierras de la comunidad indígena Sikuni. En la segunda parte se evaluará el proceso de las solicitudes de restitución de tierras en el periodo de tiempo 1990 –2007. En la tercera parte se sugerirá un plan de intervención del gobierno a través de una política pública que logre hacer efectivo el proceso de restitución de tierras en la comunidad Sikuni. Finalmente se formulan algunas conclusiones.

Objetivo General

Analizar el estado del proceso de solicitud de restitución de tierras de la Comunidad Sikuani en el municipio de Mapiripán (Meta) en el periodo 1990 a 2007

Objetivos Específicos

- ✓ Adelantar el diagnóstico sobre los determinantes que generaron la expropiación de tierras de la comunidad Sikuani ubicada en el municipio de Mapiripán (Meta).
- ✓ Evaluar el progreso de las solicitudes de restitución de tierras de la comunidad Sikuani en el municipio de Mapiripán (Meta)
- ✓ Sugerir un plan de intervención del gobierno a través de una política pública que logre hacer efectiva la restitución de tierras de la comunidad indígena Sikuani.

Capítulo 1: Marco de Referencia

Este capítulo tiene como finalidad adelantar una revisión de los postulados teóricos en torno a los temas de identidad y territorio, en el entendido que el territorio aparece como el ámbito geográfico, marco de vida y espacio contextual de los grupos sociales.

El capítulo se centra en todos aquellos postulados que muestran la estrecha relación existente entre el individuo y el territorio que es algo que permite la subsistencia, ya que en él se desenvuelve la memoria que nos cohesiona como unidad de diferencias. El territorio, entendido como ámbito espacial de nuestras vidas, es el mismo que debe ser protegido por nuestros gobernantes del desequilibrio, pues se necesita de él para sobrevivir con identidad

1.1 Marco Teórico

El territorio aparece como el ámbito geográfico, marco de vida y espacio contextual de los grupos sociales. Es el resultado de la práctica del hombre ejercida sobre el espacio y, por tanto, la relación compleja entre las prácticas sociales y el espacio material. El paisaje es el resultado final de las dinámicas presentes en el territorio, es una síntesis final, un totalizador histórico (Delgado, 2007:115). Subjetivamente es la «percepción vivencial del territorio» (Giménez, 2001:9), de manera que «si no existe o no se toma en consideración la percepción humana desaparecen los valores interpretativos, estéticos o culturales que son intrínsecos a la noción de paisaje» (Delgado & Ojeda, 2007:444).

Esta apropiación-valoración es un proceso por el cual se vincula al individuo con el espacio. Según el modelo dual de E. Pol (Vidal, Pol, & Però, 2004), la apropiación es una relación dialéctica e indisoluble entre la componente «identificación simbólica» y la «acción-transformación».

Así mismo, el paisaje es la «convergencia de percepciones subjetivas» (Delgado & Ojeda, 2007:444), es el conjunto de significados de un territorio, socialmente elaborados y compartidos, en torno a los cuales se originan ciertos aspectos de la identidad y define una manera de interpretar la realidad, determinando las relaciones entre sujetos (Rizo, 2006).

En un mundo globalizado como el nuestro, la gente se aferra a su identidad como fuente de sentido de sus vidas. (Castells, 2003), eso revelan los conflictos sociales o violentos, que configuran el mapa dramático de una humanidad convulsionada y que se remiten

casi siempre a la defensa de identidades agredidas. (Castells, 2003). Cuanto más abstracto se hace el poder de los flujos globales de capital, tecnología e información, más concretamente se afirma la experiencia compartida en el territorio, en la historia, en la lengua, en la religión y, también, en la etnia. El mito universalista de los racionalismos liberal y marxista ha sido desmentido por la experiencia histórica.

(Ruiz, 2007:84) afirma que:

“la identidad adscribe a un territorio, no es una cuestión adjetiva, es el espacio vital donde se desarrollan los procesos de vida social. La tierra para los campesinos como objetos de trabajo que permiten la subsistencia, su tenencia, su uso y distribución, su manejo, el agua en manantiales y ríos, los bosques como medio y sus recursos o como paisaje, la fauna como componente de la diversidad biológica expresada culturalmente de muchas maneras en distintos órdenes simbólicos de quienes las habitan y lo que representan”

Es por eso que es pertinente mostrar la relevancia que tiene el concepto de la identidad de grupo ya que es el conjunto de construcciones identitarias a través de la cual el grupo se reconoce como nosotros y son capaces de diferenciarse de otros. (Giménez, 2009:22)

Aunque las personas siguen viviendo en ámbitos localizables, espacial y socialmente, la génesis de su habitus está cada vez más condicionada por influencias culturales que superan su ámbito local propiamente dicho. Se experimenta, de este modo, una creciente desterritorialización de los referentes simbólicos-culturales y de la identidad individual y colectiva (Entrena, 1998), Los sujetos se perciben como miembros de un grupo y producen diversas representaciones en cuanto a su origen, historia y naturaleza. La identidad de grupo implica definiciones orientadas a la acción, pero también son elementos incorporados al conjunto de prácticas culturales (Gimenez, 2009:29).

El concepto de territorio no equivale meramente a “tierras o predios”. En palabras de (Piñakwe, 1997):

“El territorio no es simplemente el espacio geográfico delimitado por convenio, el territorio es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve la memoria que nos cohesiona como unidad de diferencias. El territorio, ámbito espacial de nuestras vidas, es el mismo que debe ser protegido por nuestros pueblos del desequilibrio, pues necesitamos de él para sobrevivir con identidad. Existe

una reciprocidad entre él y nosotros, que se manifiesta en el equilibrio social que permite un aprovechamiento sustentable de los recursos de que nos provee éste. El equilibrio social debe manifestarse en la protección del territorio para proveer a las futuras generaciones de un espacio rico en recursos y lleno de memoria”

De lo anterior la importancia de estudiar los efectos de las políticas públicas en una de las comunidades más importantes para el patrimonio étnico de nuestra nación, que requiere de la protección y atención del Estado Colombiano como garantía de los principios constitucionales de ser un estado étnico, pluricultural e incluyente que piensa en la colectividad y el respeto por los derechos comunes.

Si se busca un concepto de identidad se refiere a la idea que se tiene de nosotros mismos en relación con los que nos rodean. Es «un proceso por el que los individuos definen su diferencia de otros, mediante la autoasignación de una serie de atributos culturales relativamente estables en el tiempo. Esa autoidentificación requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa.» (Giménez, 2009:12). Es necesario hacer distinguir dos niveles de identidades: la individual, que tiene que ver con cada persona o lo que define el yo; y la identidad de grupo, que se explica por las relaciones interpersonales con los demás sujetos.

Si damos una mirada a lo expresado por (Pintxen, 1997) los individuos gozan un conjunto de características específicas: rasgos psicológicos, capacidades, cualidades corporales, intereses intelectuales, gustos y preferencias. Pero además conservan una identidad social, donde se evidencia su pertenencia a determinados grupos con los que se identifican. En el entendido que es aquella parte del auto-concepto derivado del «conocimiento de pertenencia a uno o varios grupos sociales, la valoración de esa pertenencia y su significado emocional. Desde este concepto de construcción de identidad social, el sujeto se asociará a los grupos que afirmen sus aspectos positivos de su identidad y abandonará los que la pongan en conflicto». (Aguirre, cit. Rizo, 2006:4).

Castells (1998:28) plantea el concepto de identidad como un proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural o conjunto de atributos relacionados culturalmente ». Pero este «conjunto de atributos culturales» no son estables, sino que son originados en el marco de las relaciones sociales (Candau, 1998:24).

Los sujetos están siempre situados y relacionados con unos entornos específicos, y juegan un papel en la formación de su identidad (Valera & Pol, 1994). La vinculación de la teoría de la identidad con el territorio, cuando se tiene clara la diferencia entre la identidad grupal de la individual, no sólo del vínculo de los grupos sociales con su entorno, sino también del lazo emocional que se genera entre los individuos y su espacio (Lindón , 2006), aunque ambos aspectos se encuentran en estrecha relación, define La identidad social a partir del sentimiento de pertenencia a uno o varios grupos, además que comparte una serie de características con los miembros de ese grupo (Aguirre , cit. Rizo , 2004).

Una identidad vinculada a un territorio se manifiesta también en términos de pertenencia, pero implica compartir un conjunto de interpretaciones y valoraciones, tanto de ese territorio como del grupo en sí, diferenciándose de las personas ajenas a éste (Giménez, 1999).

El individuo que se apropia del paisaje, adquiere unas determinadas cogniciones, afectos, sentimientos y actitudes, que pueden resultar parte fundamental de su propia definición como sujeto (Proshansky, 1978). Los escenarios físicos, en los que el individuo desarrolla su vida cotidiana, juegan un papel importante en la configuración de su identidad individual. (Proshansky 1983:159)

El territorio, y la identidad son productos edificados socialmente. Es decir, son estructuras que han sido simbolizadas, construidas y modificadas en el transcurso del tiempo por los diferentes actores sociales (Oslender, 2002), todo ello en contextos socioculturales y políticos concretos. Así, autores como (Raffestin, 1980) enfatizan las connotaciones políticas, y por tanto de poder, del concepto de territorio, y (Castells, 1998) nos habla de la construcción social de la identidad en un contexto marcado por las relaciones de poder.

En las formulaciones de los pueblos indígenas está claro que el concepto de territorio no equivale meramente a “tierras o predios”. En palabras del senador indígena (Páez, 2003) de Colombia:

“El territorio no es simplemente el espacio geográfico delimitado por convenio...El territorio es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve la memoria que nos cohesiona como unidad de diferencias. El territorio, ámbito espacial de nuestras vidas, es el mismo que debe ser protegido por nuestros pueblos del desequilibrio, pues necesitamos de él para sobrevivir

con identidad. Existe una reciprocidad entre él y nosotros, que se manifiesta en el equilibrio social que permite un aprovechamiento sustentable de los recursos de que nos provee éste. El equilibrio social debe manifestarse en la protección del territorio para proveer a las futuras generaciones de un espacio rico en recursos y lleno de memoria”

Estas afirmaciones realizadas expresan un sentido amplio del territorio, y la relación que esta guarda a un espacio histórico, y al sentido de seguridad como elemento de referencia constante (Piñakwe. 1997). El territorio trasciende el espacio geográfico y las formas de posesión y propiedad del mismo, sin desconocerlas, planteando la complementariedad existente entre las formas de apropiación y uso de recursos naturales, (Piñakwe. 1997).

Las siguientes citas hechas por indígenas permiten vislumbrar el sentido de la autonomía desde su punto de vista:

“Entendemos la autonomía como la posibilidad real de preservar nuestra identidad étnica y cultural dentro de un ámbito territorial en el cual se conserva la memoria colectiva...” (Piñakwe. 1997)

“La autonomía territorial está relacionada con la capacidad de administrar y manejar el territorio y resolver los conflictos” (Piñakwe. 1997)

La autonomía involucra el poder de tomar de decisiones en las diversas esferas de su vida como pueblos indígenas con base en su propio pensamiento y sus propias opciones de desarrollo. (Piñakwe, 1997) El desafío para todos los actores sociales, públicos y privados, consiste en comprender el significado, y poder incorporar de manera equitativa, aspectos como gobierno propio, jurisdicción especial indígena, educación bilingüe e intercultural, salud intercultural y opciones propias de desenvolvimiento económico y social (planes de vida) en las articulaciones y procesos de toma de decisiones que afectan a familias o territorios indígenas. (Piñakwe, 1997).

Ahora bien, al referirnos a el término desplazamiento, este se asume como una acción violenta que se ejerce contra otra persona, en contra de su voluntad (Cervellin y Uribe, 2000, p. 11). María Teresa Uribe (1999) define el desplazamiento como la punta del iceberg de las dinámicas bélicas, de los procesos políticos o militares diferenciales y de las particularidades regionales. De alguna manera, el desplazamiento es una especie de atalaya desde la cual se puede ver todo el drama nacional.

Al referirnos al conflicto armado interno en Colombia este se cataloga como un enfrentamiento violento, donde es importante tener en cuenta que cada una de las guerras y los conflictos internos ha respondido a una coyuntura específica.

Desde el punto de vista económico la formación de grupos armados internos surge por una lucha de recursos, dado que estos no son ilimitados y se encuentran distribuidos de manera desigual. Desde el punto de vista psicológico y evolucionista se ha identificado a los hombres jóvenes como los promotores de las guerras (Mesquida y Wiener 2001). Desde el punto de vista demográfico es la disparidad entre las tasas de crecimiento poblacional y de recursos la que incrementa el riesgo de la guerra (Choucri y North, 1975; McNeil, 1983). De cualquier manera, todas estas teorías coinciden en que el tamaño de la población es de una u otra forma una de las causas de guerras internas.

El desplazamiento interno forzado producto de la violencia, dentro del cumulo de afectados, afecta directamente a los grupos étnicos, en particular a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Su impacto es en especial complejo en la medida en que se perjudica a las comunidades y pueblos, además de los individuos y familias, y en particular el ejercicio de su territorialidad (Cervellin, S. y Uribe, F. (2000). Se entiende por territorialidad la relación hombre-mujer con el territorio, que más allá de un espacio físico está constituido por las formas de apropiación social y simbólica asociadas a éste y el ejercicio de su autonomía (Cervellin, S. y Uribe, F. (2000).

Este tipo de grupos poblacionales vulnerables y afectados por el conflicto armado: que en cifras se traducen en: comunidades afrodescendientes que conforman el 8% de la población total de Colombia y representan el 11% de la población internamente desplazada en el país. Los pueblos indígenas, representan el 2% de la población total de Colombia y el 8% de la población en situación de desplazamiento (Defensoría del Pueblo, 2005, p. 114).

En las dos últimas décadas la mayoría de los territorios colectivos referentes a los pueblos indígenas (resguardos) y a las comunidades afrodescendientes (tierras de comunidades negras), en particular del Pacífico, pasaron a convertirse en territorios estratégicos para la guerra (Defensoría del Pueblo, 2005). Una de las consecuencias del conflicto armado sobre los territorios colectivos de los pueblos indígenas y las tierras de las comunidades afrodescendientes, es que las autoridades y comunidades pierden el control sobre éstos y, en consecuencia, sobre sus planes colectivos de vida, en

detrimento de su proyecto político de autonomía territorial y cultural (Cervellin, S. y Uribe, F. 2000). Son forzadas a huir y desplazarse con la consiguiente transformación de su cultura, de su organización social y política y de las formas tradicionales de gobierno y de control social (Defensoría del Pueblo, 2005, pp. 115-116)

El desplazamiento interno a este tipo de grupos, viene en la mezcla de profundas transformaciones en todas las esferas, incluso la económica (sistemas productivos y redes de intercambio), que pone en riesgo de extinción no sólo su cultura sino su existencia como pueblo, puesto que el desplazamiento rompe lazos familiares, comunitarios, étnicos, y fortalecimiento territorial, de planes de vida, de autonomía local, los proyectos educativos, de salud, de desarrollo y demás dinámicas que se vienen dando en las comunidades (Jaramillo 2004) .

Sumado a lo anterior, se puede observar que se pierden los esfuerzos de las comunidades, las organizaciones y el Estado; se multiplican los costos de atención y de prestación de servicios y, al vulnerarse la identidad étnica, la nación pierde elementos de diversidad y riqueza cultural (Gonzales, 2004). El desplazamiento interno forzado no sólo vulnera los derechos del individuo, sino en particular los derechos colectivos al disgregar comunidades y familias.

Para la Defensoría del Pueblo (2005) con este fenómeno “se alteran las relaciones sociales y alianzas entre las diferentes comunidades y al interior de las mismas, los sistemas de autoridad y de justicia consuetudinaria, las formas de decisión tradicionales, todos ellos elementos vitales de la reafirmación de la identidad individual y colectiva que afectan particularmente a las mujeres, los niños y las niñas, los y las jóvenes y las personas mayores.

La imposición de nuevos patrones culturales aqueja también los ámbitos sociales ancestrales amenazando la identidad cultural de las colectividades” (Defensoría del Pueblo, 2005, p. 117). [33] Revista Colombiana de Sociología Nº 30 2008 ISSN: 0120-159X Bogotá - Colombia Condiciones de vulnerabilidad social... Se ve cómo la población en situación de desplazamiento pasa a enfrentar abruptamente condiciones vulnerables de existencia en la esfera social, política, económica, cultural y ambiental, transformando sus horizontes de significado en las relaciones sociales que se tejen en la ciudad receptora. En estas circunstancias, las asociaciones se convierten en una estrategia de acción conjunta a través de mecanismos de solidaridad, que permiten resignificar y transformar las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las familias en situación de desplazamiento.

1.2 Marco Conceptual

Dentro de los conceptos más importantes a resaltar en el presente trabajo se encuentra en primer lugar el de identidad, la cual para Castells (1999:28-29) es definida como el “proceso de construcción de sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales y territoriales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido”. Define sentido “como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción”. Con esta definición el autor alude al carácter social, territorial e interaccional de la identidad, lo que da a entender que la identidad no se construye a partir del individuo mismo, sino en las significaciones de los valores, normas, representaciones, creencias, del grupo al que pertenece y, a partir de las cuales los individuos guían su acción.

Por otro lado también contamos con la definición de (Giménez, 2009:12), que percibe el concepto de identidad a la idea que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás. Considerado también como un proceso subjetivo por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo. Esa autoidentificación requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa.»

Viendo el papel fundamental que tiene el territorio como garante de la Identidad en el territorio indígena, definiéndose este de acuerdo a la concepción de los geógrafos franceses y suizos (Raffestin, 1980; DiMeo, 1998; Scheibling, 1994; Hoerner, 1996), el cual se toma como el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas. En esta definición, el espacio se considera como la materia prima a partir de la cual se construye el territorio y, por lo mismo, tendría una posición de anterioridad con respecto a este último (Raffestin, 1980). Dicho de otro modo, el espacio sería una fracción cualquiera de la superficie terrestre considerada antecederentemente a toda representación y a toda práctica

En el momento mismo que se ve afectado el territorio como unidad de supervivencia de la cultura y la identidad es cuando hace aparición una de las políticas que trabaja en pro del respeto y la conservación de dicho espacio. Es así como el Ministerio de Agricultura de Colombia (2012), define la restitución de tierras como un derecho que tienen las

víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado.

El despojo es entendido como el fenómeno por el cual las personas se ven obligadas a vender a precios muy bajos debido a las circunstancias de violencia o por presiones, o cuando para lograr la transferencia del bien se falsifican firmas o documentos, incluso con la participación de funcionarios corruptos. (Ministerio de Agricultura, 2012)

Otro caso de despojo según el Ministerio de Agricultura (2012), ocurre cuando el Incoder, antes Incora, le adjudicó o le dio un terreno a una persona y presumiendo que ésta dejó abandonado el predio, se lo quitó mediante la figura de caducidad administrativa y lo adjudicó a otro.

También tenemos por otra parte la definición de abandono forzado, fenómeno que también hace parte del fenómeno mencionado, el cual se cataloga como una situación en la cual la víctima se ve obligada a dejar sus tierras para proteger su derecho la vida, libertad e integridad suya y la de su familia, razón por la cual se ve impedida para usar y explotar su predio. (Ministerio de Agricultura, 2012)

Es importante tener en cuenta que el despojo y el abandono forzado se utilizan de manera conjunta para quitarles la tierra a las personas que fueran propietarias, poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos, y que la Ley en materia de Restitución de tierras contempla tanto a víctimas de despojo como de abandono.

El término desplazamiento es asumido como una acción violenta que se ejerce contra otra persona, en contra de su voluntad (Cervellin y Uribe, 2000, p. 11). María Teresa Uribe (1999) define el desplazamiento como la punta del iceberg de las dinámicas bélicas, de los procesos políticos o militares diferenciales y de las particularidades regionales.

Conforme con la ley 387 de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”, se define como desplazado a:

Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público (artículo 1, título 1, “Del desplazado interno y de la responsabilidad del Estado”).

1.3 Estado del Arte

El Ministerio de Cultura de la República de Colombia en el año 2008, da a conocer el primer informe en el cual da una descripción de las principales características de la población Sikuni a partir de su historia, la relación que existe entre territorio y territorialidad, su sistema de reconocimiento, representación, visibilización e inclusión para finalizar con una descripción general de las principales problemáticas actuales, donde se destaca lo siguiente:

El pueblo Sikuni se caracteriza por una historia de nomadismo que determinó su amplio patrón de asentamiento.

A pesar del de la debilidad cultural de que ha sido víctima el pueblo a causa de las misiones religiosas, el accionar de grupos armados al margen de la ley, la presencia de cultivos ilícitos, y la presencia de colonos en sus territorios, han luchado fuertemente por mantener vivas sus tradiciones, y han enfrentado las adversidades con cohesión social como pueblo indígena. De acuerdo al autodiagnóstico que llevó a cabo el pueblo Sikuni en articulación con el Ministerio de cultura (2008), actualmente el 83,3% de su población habla su lengua nativa.

El Censo DANE 2005 reportó 19.791 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Sikuni, de las cuales el 51,1% son hombres (10.118 personas) y el 48,9% mujeres (9.673 personas).

El pueblo Sikuni se concentra en el departamento del Vichada, en donde habita el 61,2% de la población (12.119 personas). Le sigue Meta con el 25,1% (4.966 personas) y Arauca con el 4,5% (891 personas). Estos tres departamentos concentran el 90,8% poblacional de este pueblo. Los Sikuni representan el 1,4% de la población indígena de Colombia.

A continuación se muestra el asentamiento y concentración de esta población:

Total de la población: 19.791 personas			
Patrones de asentamiento		Población Sikuni	Porcentaje sobre el total de población Sikuni
Departamentos de mayor concentración	Vichada	12.119	61,20%
	Meta	4.966	25,10%
	Arauca	891	4,50%
	Total	17.976	90,80%
Población Sikuni en áreas urbanas		2.895	2.895

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005.

La población Sikuni que habita en zonas urbanas corresponde al 14,6% (2.895 personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas).

En cuanto a su territorio y territorialidad, de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de Cultura (2008) el pueblo Sikuni es el grupo indígena con mayor presencia territorial en la Orinoquía Colombiana, presente en los departamentos de Vichada, Arauca, Casanare y Meta, ubicados en territorios de reservas natural e hídrica. Su territorio ancestral abarca áreas de estos departamentos y del país hermano de Venezuela, donde aún habita una población aproximada de 15.000 Sikuanis.

La forma de asentamiento característica del pueblo Sikuni consiste en formar pequeños núcleos poblacionales intermitentes consecuentes con su permanente movilidad. Sin embargo hoy los Sikuni se establecen de forma sedentaria en lugares de fácil acceso a las fuentes hídricas donde desarrollan parte de la cotidianidad interna. (Suarez, 2008)

Las tierras de sus resguardos se caracterizan por ser sabanas y bosques tropicales formados en las llanuras de los ríos. Esta característica hace que las tierras sean de tipo aluvial aptas para la agricultura de productos de pan coger básicamente. Los bosques generalmente son reservas forestales y son considerados sitios sagrados. (Suarez, 2008)

La presión sobre la tierra y los recursos, el conflicto con los colonos y el accionar de grupos armados al margen de la ley son factores que promovieron su sedentarización. A pesar de los beneficios que la titulación de tierras en forma de resguardo ha significado al pueblo para su seguridad social y cultural, así como para el control territorial, también se convirtió en un factor de sedentarización. (Ministerio de Cultura, 2008)

Como consecuencia del proceso de sedentarización se ha generado un uso intensivo de los bosques de galería, lo cual ha significado la disminución de las especies. A la vez, la reducción de sus territorios ha originado conflictos con los colonos en las actividades de pesca, recolección y caza, lo cual ha ocasionado que los indígenas prefieran esperar a los mercados que incluyen productos diferentes en su dieta (Martínez, 2008).

Según (Martínez, 2008), esta población ante la necesidad de control sobre su territorio ancestral y la presión sobre la tierra ejercida por colonos y grupos armados al margen de la ley, el pueblo Sikuni ha optado por atomizar sus comunidades, reduciendo su tamaño y ampliando su campo de acción.

Su fuerza organizacional y el difícil contexto social en el que se encuentran han hecho del pueblo Sikuni un receptor significativo de la oferta estatal (Sánchez & Arango 2004). Sin embargo, la acción estatal no ha contado con una adecuada articulación ni planificación, lo cual ha generado desorden en su implementación y una alta dificultad para obtener los resultados planteados. En algunos casos, a causa de la desorganización, los efectos de las intervenciones han sido más negativos que positivos. Igualmente, las acciones institucionales, siguen reproduciendo las prácticas paternalistas de asistencialismo que impiden la autonomía, la adquisición de poder y la gestión propia de los pueblos indígenas. (Jiménez, 2008).

Entre las problemáticas Sikuni se identifica la progresiva sedentarización, la cual trajo consigo cambios culturales, que han generado problemas a diferentes niveles: por un lado, aún fundamentan su dieta en el modelo de economía tradicional, a pesar de que el espacio geográfico en el que se encuentran es reducido y la oferta animal ha decaído. (Jiménez, 2008)

Por las razones anteriormente expuestas, no existe una soberanía alimentaria, debido a la ausencia de cultivos, que han producido déficit nutricional, y han creado condiciones para la mendicidad de las familias en las calles del municipio, a lo cual se suma la falta de actividad ocupacional que mantenga cohesionada a cada familia en torno a un proyecto de vida (Suárez, 2008).

La presencia de colonos que ejercen presión sobre el territorio y los recursos se configura como un factor que pone en riesgo la seguridad alimentaria del pueblo y el control territorial, y que a partir de las relaciones desiguales que se presentan entre

estos y las comunidades Sikuanis, se han generado impactos sobre la continuidad cultural del pueblo.

De acuerdo con el diagnóstico presentado por el Ministerio de Cultura en el año 2008, La presencia de cultivos de uso ilícito y grupos armados al margen de la ley han sido factores de gran riesgo físico y cultural para el pueblo. A partir de la bonanza cocalera que se estableció en la región en la que habitan, muchos Sikuanis abandonaron la producción y transformación tradicional de alimentos a cambio de trabajar en la recolección de la hoja de coca, ya que representaban mayores ganancias.

Las dinámicas sociales y culturales de los cultivos de uso ilícito también conllevaron a un cambio en los valores Sikuanis, que está directamente relacionado con el aumento del alcoholismo y el uso de sustancias psicoactivas, así como comportamientos de alejamiento y desinterés, especialmente de los jóvenes, de la tradición. (Sánchez & Arango 2004).

Capítulo 2: Diagnóstico Sobre los Determinantes que Generaron la Expropiación de Tierras de la Comunidad Sikuaní Ubicada en el Municipio de Mapiripán (Meta).

A partir de la sistematización realizada a las entrevistas, se clasificó la información en 5 diferentes categorías:

- Contexto Histórico
- Características socioeconómicas de la comunidad indígena
- Efectos económicos de la expropiación de tierras a la comunidad indígena Sikuaní
- Análisis en el marco de la política de restitución de tierras.
- Derecho a la entidad étnica

2.1 Contexto histórico

El descubrimiento de los Llanos Orientales fue realizado por comerciantes alemanes que tenían como interés la búsqueda de riquezas, razón por la cual no hubo establecimientos permanentes. Aproximadamente entre 1531 y 1590 los españoles entraron a los llanos colombianos realizando veintisiete expediciones de búsqueda de El Dorado. Desde finales del siglo XVI la Corona española determina que la zona de los llanos no era objetivo de población, de modo tal que, a diferencia de los Andes, no hubo

asentamientos permanentes debido a la forma de ocupación del territorio indígena, el clima y las enfermedades (Martínez, 2008). Debido a la situación nómada de las comunidades indígenas y a que los intereses extractivos de los conquistadores estaban dirigidas a otras zonas del país, en el periodo de la conquista no hubo una relación estrecha entre conquistadores e indígenas Sikuni.

Entre los siglos XVII y XVIII hubo una reorganización espacial y poblacional en los Llanos Orientales, pues la región fue encargada a órdenes religiosas jesuitas, franciscanas, agustinianas y dominicas, que redujeron y adoctrinaron a los indígenas mediante la fundación pueblos, el estudio de las lenguas de los indígenas, formación de vocabularios y la traducción de catecismos. De este modo, la acción misionera modificó el sistema de intercambio y asentamiento indígena, introduciendo nuevas formas de concebir el territorio, la propiedad y las creencias religiosas. Todo ello, sumado a las enfermedades, la prohibición de la caza y pesca, del uso de la lengua, ocasionó el descenso demográfico del pueblo Sikuni y el debilitamiento de su cultura (Martínez, 2008).

Los Sikuni fueron una etnia bastante renuente al contacto con los extranjeros que llegaron a la región desde el siglo XVII, su condición nómada les permitió resistir a los intentos de reducción por parte de los misioneros. Sin embargo padecieron incursiones de portugueses y holandeses que buscaban esclavos para comerciar en las Guayanas o en las plantaciones del Brasil (Martínez y Suárez, 2008).

A finales del siglo XVIII entraron a los llanos los colonos, “libres” y mestizos por las nuevas políticas de segregación de la Nueva Granada, lo cual acabó con los resguardos y desplazó un gran número de población hacia la región (Martínez, 2008). El crecimiento de la población generó conflictos entre el pueblo Sikuni y colonos, lo cual provocó la huida de los primeros llano adentro y permitió la consolidación de blancos y mestizos en los territorios ancestrales del pueblo. A partir de este momento se generó el mestizaje cultural, lo cual sentó las bases de la sociedad llanera.

En la época de la Independencia y en el periodo Republicano, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el llano comienza una época de colonización ocasionada por la situación interna del país, lo cual involucró a las comunidades indígenas:

Para el siglo XIX, el pueblo Sikuni debieron afrontar una nueva oleada de colonización, pues el estado republicano buscó reducir a los “indígenas errantes” a poblados, razón por la cual les asignó tierras de dominio individual o familias, estableció colegios de

misiones y amplió los resguardos de los pueblos que tuvieran; para ello, delegó a las autoridades religiosas la misión de civilizar y capturar las tribus indígenas nómadas. (Martínez y Suárez, 2008).

Tras la independencia y el establecimiento de la República se implantaron en el territorio Sikuani grandes haciendas ganaderas y compañías extractoras de recursos naturales. Los territorios comenzaron a tener dueño a través de hatos, haciendas, fundos y fincas, y se invadieron los territorios ancestrales indígenas sin ningún control y el medio ambiente se comenzó a transformar de acuerdo a los intereses de los colonos. (Martínez y Suárez, 2008). Ante esta situación, el pueblo Sikuani reaccionó atacando las haciendas y poblaciones, a lo cual los colonos respondieron exterminando a los indígenas. En ese momento se introdujo el término de “guahibiar”, para describir la práctica generalizada de cacería de indios, la cual se mantuvo en los llanos hasta mediados del siglo XX. (Martínez y Suárez, 2008).

A mediados del siglo XX, debido las políticas de la Reforma Agraria se acabó de invadir los territorios ancestrales del pueblo Sikuani, catalogados como tierras baldías (tierra de nadie) porque aparentemente se encontraban deshabitados, no se les reconoció la posesión de éstos porque no se encontraban en asentamientos permanentes a causa de su tradición nómada o seminómada (Martínez, 2008).

En este proceso, los colonos se adueñaron de varios territorios Sikuani, los cuales quedaron reducidos a pequeñas parcelas, y los indígenas antes propietarios quedaron sujetos a trabajos como jornaleros. No hubo leyes a favor del indígena, ni un Estado protector, ya que aún estaba en construcción la política de integración nacional. A la vez, la época de la Violencia de los años 50 fomentó la migración a los llanos como territorio de refugio, ocasionando el desplazamiento de los indígenas de la región (Jiménez, 2008).

En la década de los 80 comenzó la exploración y la explotación petrolera de Caño Limón, lo cual nuevamente redujo los territorios Sikuani. En términos generales la historia del pueblo Sikuani ha estado asociada a la incursión colonizadora y el despojo de las tierras ancestrales causando la ruptura de los lazos culturales de identidad (Martínez y Suárez, 2008).

La historia reciente del pueblo Sikuani no ha cambiado significativamente en cuanto a las violaciones a sus derechos y la profanación de sus tierras consideradas sagradas. Durante este siglo se han visto sometidos al despojo sistemático de sus tierras por parte

de los terratenientes y actores armados al margen de la ley, que ejercen control y presencia en ellas. La comercialización de productos e intromisión de agentes desestabilizadores han agudizado su debilitamiento cultural (Jiménez, 2008).

De acuerdo a lo afirmado en la entrevista realizada al líder de la comunidad el señor Manuel Tovar Guerrero el Resguardo de Caño Ovejas fue creado en 1982, conformado en un momento de auge del narcotráfico con la inminente invasión generalizada del territorio, en ese entonces apenas se reconoció un área de 1720 Hectáreas, una parte mínima de las 50000 Hectáreas que en 1979 se habían acordado conformarían el resguardo (Tovar, 2007). Al año siguiente de ser creado el resguardo, el Incora empieza a titular a personas ajenas, predios que se traslapan o son contiguos al Resguardo en un proceso continuado de entrega del territorio ancestral que desde entonces no ha cesado. Ante las solicitudes reiteradas de la comunidad de revocar esas titulaciones y de ampliar el resguardo en 1990 el Incora compra algunos predios con el fin de devolverlos a las comunidades (Tovar, 2007). Sin embargo estos nunca se incorporan al resguardo, al tiempo que prosigue la titulación del territorio ancestral a personas ajenas con quienes se presentan continuos conflictos. Durante los años siguientes la comunidad persisten en las solicitudes al incoder sin resultado, y aunque siguen desarrollando sus actividades sociales productivas y ceremoniales en el territorio enfrentan graves limitaciones de acceso a ciertos lugares por parte de actores armados y han sufrido toda suerte de afectaciones que ponen en riesgo su supervivencia. (Tovar, 2007)

El Líder el señor Manuel Tovar Guerrero afirma que el territorio por sus condiciones estratégicas en la frontera entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica, el territorio Sikuni y su control se ha convertido en objetivo de los diferentes actores del conflicto armado, determinando la apropiación progresiva del territorio por colonos, agroindustriales y cultivadores ilegales, ante la pasividad o complicidad del Estado.

Esta reducción de la territorialidad, agravada por la degradación ambiental, producto de las fumigaciones y de la agroindustria, a las que se suma las intervenciones inapropiadas del Estado, está imponiendo a la comunidad indígena condiciones de vida inhumanas que ponen en riesgo su supervivencia física y cultural.

Finalmente afirma el Líder José Díaz mesa que en consonancia con la histórica ideología genocida, en las dos últimas décadas prosigue la Invasión del territorio indígena por colonos y finqueros, cultivadores de ilícitos y agroindustriales, en

connivencia con actores armados y alentados por el INCORA que conformó como resguardos mínimas extensiones del territorio, mientras que abrió generosamente a la colonización el territorio indígena.

2.2 Características Socioeconómicas de la Comunidad Sikuni

La producción económica de los Sikuni está determinada por el tamaño de la población, dada la cantidad de tiempo de trabajo y de consumo. La tierra es un bien colectivo y no puede ser comercializado. No obstante, el producto agrícola y las herramientas de trabajo son privados.

Los miembros de la comunidad pueden cultivar donde mejor les parezca respetando el sembrado del otro y cuando el conuco es abandonado otro lo puede sembrar. Las cosas para el pueblo indígena tienen un valor en la medida que puedan prestar un servicio a otra persona y no por un valor monetario.

La caza se caracteriza por la repartición de lo cazado entre los que habitan el caserío.

Entre las actividades más importantes en la vida de la comunidad, está la preparación del conuco “abi”, para las siembras de plátano, piña, ñame, yuca brava, mapuey y otras frutas. Son los hombres de la comunidad los que acuerdan cuando deben iniciar labores de los conucos y todos trabajan en cada uno de sus conucos. El dueño del conuco proporciona el alimento y la bebida suficiente para corresponder a quienes les acompañan, nadie se puede excusar para no asistir al trabajo. De otra parte, en los dos últimos meses del año, en la época seca, los hombres de la comunidad se dedican a tumar el monte. Dicha actividad lleva el nombre de “Unuma”. En marzo y abril, las parcelas desbrozadas están listas para la siembra; mientras que ésta está a cargo de hombres y mujeres, el desyerbe y la recolección son tareas exclusivas de las mujeres.

Es importante aludir a la reciprocidad como un factor necesario y coactivo en la vida de la comunidad, al extenderse del trabajo en los conucos a la pesca, la cacería y la construcción de casas. Este mecanismo permite y garantiza el trabajo, al tiempo que lo hace más efectivo.

Como se mencionó anteriormente, las mujeres son las encargadas de la recolección. Ellas recogen la yuca, la rallan y luego la exprimen en un sebucán. Posteriormente pasarán por un pilón y un tapiz, con el fin de sacar la harina más fina para el cazabe. El mañoco se elabora sin necesidad de cernir la harina. El ácido extraído de la yuca, en ocasiones se hierva con ají durante varias horas, y luego es utilizado en reemplazo de

la sal, en el consumo de carnes y pescados. El cazabe y el mañoco son la base de la alimentación de las familias Sikuanis, acompañados de pescado, carne o simplemente agua.

La pesca cumple otro papel de importancia en la actividad económica de las comunidades Sikuanis; en verano la pesca es abundante y se hace con anzuelos, arpones, mallas y trampas. Entre las especies de pescado conocidas están cachama, cajaro, bagre, palometas, rayados, sapuaras, entre otras. También se encuentra la cacería, actividad exclusivamente masculina y sometida a interdicciones y prohibiciones. La caza es habitual durante todo el año, aunque sea el verano el más propicio para la caza de lapas, chigüiros, gurrees o armadillos y aves. Con la reducción del espacio geográfico de los indígenas, la caza y la pesca disminuyeron notablemente, siendo sus consecuencias más nefastas la desnutrición y parasitismo.

Cabe incluir que dentro de su alimentación, los Sikuanis contemplan insectos con alto contenido proteínico. En tiempo de lluvia, consumen hormigas culonas –o bachaco- con cazabe o mañoco. De las palmas de moriches, sacan las larvas de mojoy y makunto, las cuales comen crudas. También se incluyen frutos silvestres, recogidos a lo largo de todo el año: Pendare, sarrapia, cucurita, pepas de seje, son consumidas solas o en forma de chicha.

Acerca de los utensilios domésticos de uso cotidiano, estos responden a su mundo mitológico. Según los Sikuanis estos elementos fueron dados por la primera generación para que los utilizaran. Eso explica los motivos utilizados (representación de personajes de esa primera generación): el camino, las constelaciones, etc. Para la elaboración de esos utensilios existen prohibiciones y rige una división del trabajo por sexos.

Sin embargo hoy los Sikuanis se establecen de forma sedentaria en lugares de fácil acceso a las fuentes hídricas donde desarrollan parte de la cotidianidad interna. Su actual forma de asentamiento se caracteriza por un conjunto de casas no superior a una veintena, en cuyo centro se ubica una casa amplia que se utiliza para llevar a cabo actividades de tipo tradicional y reuniones comunitarias. La familia nucleada tiene un complejo sistema de distribución habitacional que está mediada por la decisión de los mayores de la familia. (Sánchez, 2003)

Las tierras de sus resguardos se caracterizan por ser sabanas y bosques tropicales formados en las llanuras de los ríos. Esta característica hace que las tierras sean de tipo aluvial aptas para la agricultura de productos de pan coger básicamente. Los bosques

generalmente son reservas forestales y son considerados sitios sagrados (Castro, 2000).

La presión sobre la tierra y los recursos, el conflicto con los colonos y el accionar de grupos armados al margen de la ley son factores que promovieron su sedentarización. A pesar de los beneficios que la titulación de tierras en forma de resguardo ha significado al pueblo para su seguridad social y cultural, así como para el control territorial, también se convirtió en un factor de sedentarización (Sánchez, 2003).

Como consecuencia del proceso de sedentarización se ha generado un uso intensivo de los bosques de galería, lo cual ha significado la disminución de las especies. A la vez, la reducción de sus territorios ha originado conflictos con los colonos en las actividades de pesca, recolección y caza, lo cual ha ocasionado que los indígenas prefieran esperar a los mercados que incluyen productos diferentes en su dieta (Martínez, 2008).

Más allá de la ocupación del espacio territorial propiamente dicho existen unas formas de manejo de su diversidad de paisajes y la variedad de recursos que los Sikuni aprovechan a lo largo del año. Estas formas de manejo corresponden al desarrollo de prácticas milenarias y conocimientos tradicionales que han sido determinantes en su conservación. (Castro, 2000)

Para comprender cabalmente las afectaciones territoriales socio-culturales y ambientales sufridas por los sikuni a raíz de la invasión de su territorio por no indígenas y del desarrollo del conflicto armado es necesario entender el funcionamiento de la sociedad sikuni y su relación con el territorio y sus diferentes ecosistemas de sabanas y selvas. (Sánchez, 2003).

En palabras de (Martínez, 2008), el modo de producción indígena, articula de manera sistémica por lo menos tres ámbitos de relaciones:

1- Sistema productivo o modo de producción indígena: sistema de interacción con el medio ambiente, a través del uso principalmente de tecnologías tradicionales no mecanizadas, marcado por el conocimiento tradicional de los ciclos temporales y de la diversidad de ecosistemas y espacios de uso que se utilizan a lo largo del año. Además de asentamientos permanentes los Sikuni utilizan campamentos estacionales de acuerdo a las actividades que se estén desarrollando, desplazándose por el territorio ancestral.

2- Relaciones familiares y estructuras sociales que sirven a marco a las formas de trabajo, intercambio y reciprocidad. Los Sikuni tienen un sistema de parentesco que extiende los lazos de hermandad y alianza al conjunto de la comunidad y establece las responsabilidades sociales y económicas de cada uno de sus miembros. Las parentelas locales tienen relaciones de alianza matrimonial que extienden los lazos de reciprocidad con otros poblados de la misma zona y en parte con otras poblaciones más distantes. Las comunidades Sikuni presentan características de habla y comportamiento que se dicen provienen del hecho de descender de un ancestro común.

3- La Relación con el Estado y la sociedad mayor que ha evolucionado desde una situación colonial de sometimiento en la que el indígena era un objeto más de la economía extractivista, en tiempos del esclavismo y las caucherías, pasando por relaciones laborales de explotación de la mano de obra indígena, hacia un reconocimiento paulatino y parcial de sus derechos humanos, en el marco del cumplimiento del convenio 169 OIT- y la Constitución de 1991. El reconocimiento de las Organizaciones y de las autoridades tradicionales y Cabildos ha viabilizado el desarrollo de procesos y proyectos productivos que aportan significativamente a la economía doméstica.

Los Sikuni siembran, cazan, pescan y recolectan. Los inventarios de recursos aprovechados por los Sikuni abarcan varias decenas de cultivos, decenas de mamíferos y reptiles, centenares de aves, centenares de peces, un número importante de insectos. Todos estos recursos se aprovechan para la elaboración de artefactos para el procesamiento de alimentos, la elaboración de trampas, los tejidos, la construcción de viviendas, etc. También es importante la cría de animales domésticos y en algunas comunidades la ganadería a pequeña escala. (Castro, 2000)

Es importante entender que el nomadismo de los Sikuni no es deambular por el territorio en pos de lo que dé la naturaleza. Por el contrario se trata de unos recorridos culturalmente planificados cuyo aprovechamiento responde a un conocimiento sistemático y riguroso (Martínez, 2008). El orden de ese proceso de movilidad está determinado por el seguimiento de los calendarios astronómico y ecológico que establecen el momento de desarrollo de las diferentes actividades productivas, sociales y ceremoniales en los diferentes paisajes naturales del territorio.

2.3.1 Efectos Económicos de la Expropiación de Tierras a la Comunidad Indígena Sikuani.

Para este aparte es pertinente presentar algunos de los efectos generales de la problemática del impacto del desplazamiento forzoso en Colombia en cuanto a condiciones socioeconómicas dadas a conocer por (Ibáñez y Moya, 2006), los cuales servirán de base para pasar de lo general a lo particular.

Las víctimas del desplazamiento forzoso migran a causa del conflicto armado, bien sea por ataques directos o como estrategia para evitar hechos violentos. Los principales responsables de la migración forzada son los grupos al margen de la ley (guerrillas y paramilitares o autodefensas). (Ibáñez y Moya, 2006).

Las minorías étnicas son un claro ejemplo, debido al cambio cultural que deben enfrentar además de las pérdidas económicas que impone la migración forzada. Los grupos étnicos¹³ representan el 8,20% de la población desplazada y este porcentaje ha venido aumentando en los últimos años, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Entre 2002 y 2006, más del 12% de la población desplazada pertenecía a estas minorías. Dos razones, no excluyentes, pueden estar causando el éxodo de esta población. Por un lado, el traslape de las regiones donde residen con aquellas a donde se ha trasladado el conflicto. Por otro lado, es probable que los grupos al margen de la ley estén atacando a las minorías étnicas para ocupar sus tierras.

MINORÍAS ÉTNICAS COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA
(En porcentajes)

Fuente: Acción Social.

En siguiente gráfico se muestra la tendencia del desplazamiento por autores a partir de 1999. En septiembre de 2007, las autodefensas eran responsables del 12,33% de los desplazamientos, los grupos guerrilleros de un poco más del 25%, las fuerzas públicas del 0,65% y otros autores del 18%. La responsabilidad de las autodefensas en el desplazamiento forzoso ha disminuido de 13% en 2005 a 3,2% en 2006, presumiblemente debido a los acuerdos de paz firmados con dichos grupos. Por otro lado, la responsabilidad de los grupos guerrilleros disminuyó del 35,6% en el 2005 al 12% en el 2006, mientras que la responsabilidad de autores desconocidos aumentó del 43% al 63% en estos dos años. En este punto, cabe señalar que en Colombia la mayor parte de los desplazamientos ocurren a nivel individual. A septiembre de 2007, los desplazamientos individuales alcanzaron el 80,8%, mientras que los masivos estaban alrededor del 19%. (Ibáñez y Moya, 2006)

Fuente: Acción Social (AS).

Casi el 88% de los hogares migra de manera reactiva, es decir tras ser víctimas directas del conflicto armado: 54,5% por recibir una amenaza directa, casi el 19% por intento de homicidio y 34,5 por homicidio a algún miembro de la familia, entre otros. Por otro lado, cerca del 12% de los hogares migra preventivamente, bien sea por el nivel de violencia en la zona o por percibir posibles amenazas. (Ibáñez y Moya, 2006)

Las estrategias de migración adoptadas, ya sean para protegerse de posteriores ataques o para mitigar el impacto económico, indican que en casi el 60% el desplazamiento ocurre dentro del mismo departamento, y solamente en el 17% de los casos la migración es intramunicipal. La migración se realiza mayoritariamente de manera directa (93%) al municipio de recepción donde se asientan. Por último, un poco más del 78% de los hogares perciben el desplazamiento como una decisión definitiva. Dicho porcentaje se podría modificar si las condiciones de violencia en su municipio de origen mejoran. (Ibáñez y Moya, 2006)

Cuando las personas que abandonan el hogar son las principales receptoras del ingreso del hogar el impacto económico es más profundo. Si bien en algunos casos dicha fragmentación responde a estrategias adoptadas por los hogares para mitigar el impacto económico en el municipio de recepción, en la mayoría de las ocasiones es más bien consecuencia del conflicto armado.

Según (Ibáñez y Moya, 2006) existe alta incidencia del desplazamiento forzoso sobre las minorías étnicas, la cual viene aumentando en el tiempo. Casi un 30% de los hogares desplazados provienen de grupos afrodescendientes o indígenas. Las condiciones económicas de este grupo de población, son aún más graves debido a la pérdida de identidad cultural que implica el desplazamiento y las dificultades de inserción en los procesos productivos de los municipios de recepción.

La población desplazada tiene características diferentes, lo cual puede influir sobre la posibilidad de ser víctimas de los grupos armados. La importancia estratégica de los territorios étnicos y la pobreza predominante en estas regiones parece provocar un traslape entre la presencia de esta población y el accionar de los grupos armados al margen de la ley (Ibáñez y Velásquez, 2007). Esta característica crea diferentes patrones de desplazamiento entre las minorías étnicas y el resto de la población desplazada. El desplazamiento intramunicipal y en el mismo departamento ocurre con mayor frecuencia en el caso de las minorías étnicas, bien sea por el deseo de retornar para vigilar las tierras abandonadas, por los lazos culturales que se mantienen en el origen o por contar con menos recursos para migrar a sitios más lejanos.

En el lugar de recepción las diferencias entre la población desplazada son más evidentes. La jefatura femenina, al ser causada por el conflicto, afecta la composición del hogar y modifica abruptamente el papel de las mujeres en él. Los hogares con jefatura femenina presentan tasas de dependencia más altas y un menor número de individuos en edad de generar ingresos, lo cual aumenta la vulnerabilidad tras el

desplazamiento. La menor capacidad de generar ingresos se traduce mayor dificultad para recuperar activos y menores niveles de consumo por adulto equivalente: mientras el 28% de los hogares con jefatura masculina accede a vivienda propia en el municipio receptor, esta cifra disminuye al 13% cuando la jefatura es femenina. (Ibáñez y Velásquez, 2007).

Aunado a la dificultad de generar ingresos, la carencia de activos para otorgar como garantía de créditos que enfrentan las mujeres y las minorías étnicas, se convierten en una traba más para acceder a créditos formales e informales, creando así obstáculos considerables para superar las precarias condiciones de vida. Las cifras para el caso de los hogares encabezados por mujeres son preocupantes: solamente el 2% de los hogares accede a créditos informales frente al 11% en el caso de los hogares encabezados por hombres. (Ibáñez y Velásquez, 2007).

Las mujeres, jefes de hogar, aunque presentan una menor tasa de desempleo en recepción frente a los hombres (12% vs. 18%), parecen vincularse a trabajos de menor calidad y remuneración. Las mujeres son más flexibles en el momento de vincularse al mercado laboral (Ibáñez y Moya, 2006; Meertens, 2005; UNIFEM, 2002), pero los trabajos no ofrecen estabilidad a largo plazo, no seguridad social y reciben remuneraciones inferiores. Las minorías étnicas sufren asimismo más obstáculos para vincularse a trabajos formales ya que enfrentan una doble discriminación: por su condición de desplazados y por pertenecer a una minoría étnica.

En cuanto a la oferta de servicios públicos, los resultados sugieren patrones de comportamiento son diferentes. En primer lugar, las mujeres jefes de hogar, como consecuencia del desplazamiento, deben recurrir a la ayuda de sus hijos para solventar la caída en los ingresos.

Si bien la asistencia educativa en el municipio de origen, para este grupo de hogares, era más alta en todos los rangos de edad, en el de recepción no se mantiene dicha relación. Tras el desplazamiento la tasa de asistencia educativa disminuye para los niños entre 12 y 17 años, de manera más significativa en los hogares con jefatura femenina, resultado que no es de extrañar dado que como se ha mencionado la estrategia de generación de ingresos se basa en una mayor participación de miembros de la familia, incluidos los niños y las niñas del hogar. Por otro lado, los hogares afrodescendientes presentan menores tasas de deserción, pero tiempos más altos en la interrupción escolar. Aunque puede ser más difícil incorporarse a las escuelas, probablemente por problemas de discriminación, una vez que se vinculan las tasas de

asistencia son mayores. En segundo lugar, la cobertura de salud difiere solamente en el caso de las minorías étnicas: las tasas de cobertura de los hogares afrodescendientes son del 38%, mientras que el resto de la población desplazada tiene una cobertura de alrededor de 56%. Parece ser que las minorías étnicas se registran con menos frecuencia en el RUPD, lo cual deriva en un menor acceso a los servicios de salud. En tercer lugar, mientras que la cobertura de servicios públicos (electricidad, acueducto y alcantarillado) mejora para los hogares con jefatura femenina y para el promedio de los desplazados, las minorías étnicas se encuentran en condiciones aún más precarias. Ello se puede deber a que las minorías étnicas probablemente residen en barrios marginales con una limitada oferta de servicios públicos. Por último, la pérdida de capital social parece ser más fuerte para los hogares con jefatura femenina, mientras que las minorías étnicas tienen una mayor capacidad de recuperación. La caída más fuerte se puede observar en el caso de los hogares que perdieron al jefe del hogar debido al desplazamiento: la participación en organizaciones sociales cae del 18% al 7%. Por el contrario, en el caso de las minorías étnicas se organizan más fácil en el lugar de recepción y recuperan su liderazgo en mayor proporción, lo cual demuestra su capacidad de agruparse como grupo minoritario. (Ibáñez y Velásquez, 2007).

Como se ha explicado en los párrafos anteriores, las condiciones de la población desplazada en el municipio receptor son precarias y, en muchos casos, incluso peores a las de la población pobre e indigente urbana. La vinculación a los mercados laborales urbanos se dificulta debido a su procedencia rural, cuyas habilidades agrícolas son poco demandadas en áreas urbanas, y la elevada pérdida de activos que impide iniciar nuevas actividades productivas. Ello redundará en un menor ingreso, consumo y bienestar de los hogares; condiciones que parecen no mejorar a lo largo del tiempo. El lento proceso de asimilación en el municipio de recepción, la elevada pérdida de activos y el bajo cubrimiento de programas estatales enfocados a fortalecer la capacidad productiva de los hogares desplazados, son los factores que más determinan la poca influencia del tiempo de asentamiento sobre el bienestar, la capacidad de generación de ingresos y las condiciones económicas de la población desplazada. (Ibáñez y Velásquez, 2007).

La situación de la población desplazada merece particular atención no sólo por la dificultad que enfrentan tras el desplazamiento en el municipio receptor, sino por la persistencia de las precarias condiciones de vida. Además de analizar el impacto del desplazamiento, en el momento de la llegada al municipio receptor, es importante conocer cómo se da el proceso de asimilación, con el fin de diseñar políticas públicas

que asistan a la población desplazada en las áreas que más lo necesitan. (Ibáñez y Moya, 2006)

Teniendo en mente las tasas de desempleo de la población desplazada con respecto a la no desplazada (13,48% vs. 7,5%) y analizando la evolución temporal de dicha tasa en el siguiente grafico se puede observar que es claro que es mucho más variable para los primeros. Esto es consecuencia de la informalidad de la mayoría de sus trabajos y el corto plazo de sus contratos laborales, cuando existen.

Sin embargo, su tendencia, como se observa en la lineal del desempleo de los desplazados, ha sido decreciente. En promedio de 2001 a 2005 disminuyó en un poco más de tres puntos porcentuales. Al compararla con la tendencia de la tasa de desempleo promedia, se observa que la reducción fue superior para la población desplazada, situación que parece obedecer a la coyuntura económica positiva y no a una mejor respuesta a esta población en el municipio de recepción. Esta misma gráfica muestra cómo la tendencia de desempleo de la población desplazada está ligada a los ciclos económicos. Si el desempleo general baja, el de la población desplazada también lo hace. Empero, no parece haber un efecto de mejor asimilación ya que la brecha entre el desempleo de la población desplazada y la no desplazada no parece cerrarse con el tiempo. (Ibáñez y Moya, 2006)

Fuente: Cálculo de las autoras con base en ECH-2004.

La ayuda estatal, para la población desplazada se divide en tres etapas: prevención, ayuda humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica. El objetivo de los programas de prevención es eliminar las causas del desplazamiento; la ayuda

humanitaria de emergencia atiende las necesidades de alimentación, hospedaje, salud y transporte de la población desplazada durante los tres primeros meses; y, la estabilización socioeconómica tiene como objetivo ayudar a esta población en el proceso de asentamiento, para que recuperen su independencia económica, por medio de programas de generación de ingresos, capacitación laboral y microcréditos, entre otros. En esta última, se generan soluciones para el sostenimiento del hogar en el largo plazo y se debe reducir la dependencia de la ayuda estatal. Sin embargo, hasta el momento, la ayuda estatal para la población desplazada se ha focalizado especialmente en la ayuda humanitaria de emergencia. Los programas de estabilización económica han sido poco efectivos, debido a los presupuestos insuficientes asignados a este rubro, a la falta de voluntad política para implementar los programas y al limitado conocimiento acerca de las necesidades y condiciones particulares de la población desplazada (Sentencia T-025 de 2004). Tras la Sentencia de la Corte Constitucional, el Departamento Nacional de Planeación, calculó el monto de los recursos que se deben asignar para cubrir las necesidades de toda la población desplazada. (Ibáñez y Moya, 2006).

Los cálculos revelaron que es la fase de estabilización económica la que merece mayor atención por parte del gobierno. Mientras que la etapa de asistencia humanitaria de emergencia requiere una inversión adicional de \$276.329 millones, para la de estabilización económica son necesarios \$4.305.935 millones (Ibáñez y Moya, 2006).

Los programas de generación de ingresos, capacitación laboral y microcréditos se basan en políticas y programas ya existentes, para la población pobre, que han sido levemente modificados para responder a las particularidades de la población desplazada. Las características de esta población demandan, sin embargo, esfuerzos adicionales con el fin de garantizar impactos significativos. La pérdida de activos físicos, que enfrentan, impone un reto mayor al diseño de políticas públicas dirigidas a otorgar microcréditos a la población desplazada. Debido a esta pérdida, la población desplazada no cuenta con un colateral que sirva como garantía financiera, en el momento de acceder a créditos, ni con capital para invertir. El bajo nivel de capital físico y humano con que cuentan, dificulta la creación de microempresas que logren reducir la vulnerabilidad económica de la población desplazada. (Ibáñez y Moya, 2006).

Cuando se analiza el impacto de los programas, de manera diferenciada, según las características del desplazamiento y de los hogares, los resultados demuestran que no son homogéneos para toda la población desplazada. El tipo de desplazamiento, la

vulnerabilidad de algunos hogares y las habilidades para beneficiarse de los programas, son determinantes de la magnitud del impacto.

En primer lugar, los hogares beneficiarios, que se desplazan dentro del mismo municipio, mejoran sus ingresos y la tasa de desempleo disminuye. No obstante, el impacto sobre la acumulación de activos y el consumo por adulto equivalente es nulo. Es probable que los hogares migren a la cabecera municipal con la esperanza de retornar, en un futuro cercano, por lo cual la inversión en capital fijo o la iniciación de pequeñas empresas no es la opción preferida. Por otro lado, algunos hogares, con fuertes restricciones de presupuesto pueden permanecer en la cabecera municipal por carecer de fondos para financiar la migración a otros municipios. Estos hogares enfrentarían, por tanto, mayores dificultades para recuperarse del choque del desplazamiento. (Ibáñez y Moya, 2006)

En segundo lugar, el impacto positivo sobre hogares vulnerables es mayor. Los hogares pertenecientes a alguna minoría étnica o encabezados por mujeres, muestran mejoras significativas en los niveles de ingreso laboral y consumo, y el porcentaje de hogares por debajo de la línea de indigencia disminuye. Sin embargo, el efecto de largo plazo no parece ser significativo, puesto que la acumulación de activos no mejora, ni siquiera el acceso al mercado laboral. (Ibáñez y Moya, 2006)

Finalmente se evidencia las dificultades de la población desplazada para iniciar un proceso de recuperación económica sostenible. La vinculación a los mercados laborales es lenta y los trabajos a los cuales acceden son de baja calidad. Por otro lado, emprender actividades productivas propias, también parece una opción limitada, dada las carencias de capital físico, los obstáculos para acceder a créditos y el bajo capital humano. La restricción para generar ingresos redunda en condiciones económicas precarias que parecen persistir en el tiempo y que lleva a los hogares a adoptar estrategias que perpetúan la pobreza. (Ibáñez y Moya, 2006)

La probabilidad, de la población desplazada, de caer en trampas de pobreza es, por ende, bastante alta. Diseñar programas especiales para promover la recuperación económica de la población desplazada es imprescindible, para evitar un legado de pobreza y exclusión para unas de las principales víctimas del conflicto en Colombia. (Ibáñez y Moya, 2006)

2.3.2 Derecho a la identidad étnica

La riqueza cultural y la diversidad étnica (artículo 7 Constitución Política de Colombia), se protegen dentro del territorio nacional, previendo una serie de prerrogativas para conseguir este fin. Es así como se reconocen derechos a los grupos étnicos nacionales, con el fin de mantener su cultura, cosmovisión, raza, religión, economía y organización política, entre otras cosas y permitirles su participación activa y efectiva en las decisiones del país o la región con las que puedan verse afectadas directamente o bien de manera indirecta, mediante la consulta previa y la promoción de oportunidades de participación. (Arango R. 2004)

Los derechos de los pueblos indígenas, no sólo están consagrados en la Constitución Política sino que también se encuentran amparados por tratados internacionales, del orden del Convenio 169 de la OIT aprobado por Colombia, por lo que sus derechos también están amparados por el bloque de constitucionalidad.

El Derecho a la identidad étnica de la parcialidad indígena Sikuni de Caño Ovejas, así como la identidad étnica de todo el pueblo Jiw desplazado y asentado en Caño Ovejas está gravemente amenazado, ya que es muy posible, sino se toman medidas urgentes, su extinción, causada por la falta de reconocimiento de más del 90% del territorio ancestral, el desplazamiento forzado y constante de su territorio, provocado por los colonos y grupos armados, las amenazas constantes y las titulaciones ilegales fomentadas por las dilaciones del INCODER en concluir el trámite de ampliación del resguardo indígena. (Unhcr-Acnur, 2004)

La violación del derecho a la identidad étnica se puede concebir como una forma de destrucción de la misma, en el caso presente hay una intención clara de los colonos, de las empresas de monocultivos y cultivadores de coca vinculados directamente con la fuerza pública y los grupos armados ilegales de destruir a la parcialidad Sikuni de Caño Ovejas y al pueblo Jiw para extender sus cultivos y actividades económicas a los territorios indígenas, ante esta determinación, ni INCODER ni el estado han tomado hasta la actualidad, medidas tendentes a impedir dichos actos. (Unhcr-Acnur, 2004)

En el caso presente, dada la estrecha relación de las comunidades indígenas con el territorio y dadas las invasiones y despojo territorial que pretenden justificarse mediante las omisiones y acciones (titulaciones ilegales a terceros) de INCODER se está sometiendo a la parcialidad Sikuni de Caño Ovejas y al pueblo Jiw desplazado a Caño Ovejas a condiciones de existencia que ponen el riesgo su integridad física y mental y

los cultivadores de coca y otros actores económicos, tienen una clara intención demostrada con acciones, de que tanto la parcialidad Sikuni de Caño Ovejas, como el pueblo Jiw sean despojados paulatinamente de todos sus territorios ancestrales ubicados fuera y dentro del, dejando libres los territorios que estos ocupan en la actualidad, a los cultivadores de coca y otros actores económicos. (Unhcr-Acnur, 2004).

2.3.3 Cifras de Afectación a la Comunidad Sikuni en el Territorio Colombiano Durante la Última Década.

Dadas las cifras y especificaciones entregadas por el observatorio del programa presidencial de derechos humanos Y DIH en el año 2008, de los municipios que conforman la zona habitada por los Sikuni, el análisis de la intensidad de la confrontación armada se analiza en términos generales, a partir de los totales de acciones y contactos armados registrados en todos los municipios habitados por la etnia Sikuni entre 2003 y 2008.

Evolución de la intensidad de la confrontación en el territorio habitado por los Sikuni 2003 -2008

Fuente: Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

- Entre 2003 y 2008, los municipios habitados por la etnia Sikuni reportaron un total de 468 contactos armados frente a 384 acciones ejecutadas por los grupos armados ilegales en la zona.¹
- Al inicio del período, las acciones iniciadas por los grupos armados ilegales aumentaron significativamente frente a aquellas desarrolladas por la Fuerza Pública en la zona. Para el 2003 según el estudio desarrollado por el

¹ Fuente: boletines diarios del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, procesado por el observatorio del programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH (2008), se produjeron un total de 140 acciones que se concentraron en Saravena (51% con 71 acciones), Tame (21% con 30) y Arauca (15% con 20), municipios en los cuales se presentaba escasa presencia de la Fuerza Pública.²

- Entre 2003 y 2004 se presenta en la zona una disminución del 45% en el número de acciones perpetradas por los grupos armados ilegales, al pasar de 140 acciones a 77, para tener un leve repunte en 2005 con 100.³

Evolución de la intensidad de la confrontación en los municipios ubicados en Arauca 2003 -2008

Fuente: Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

- En materia de contactos armados, a partir de 2003 se presenta un incremento del 26% en el número de combates iniciados por la Fuerza Pública, al pasar de 54 en 2003 contactos a 68 en 2005, para después presentar una leve disminución de la iniciativa militar. Esta alza está relacionada con la iniciación de la Operación Soberanía emprendida por las Fuerzas Militares, la cual involucraba el 50% de las tropas de la Brigada XVIII, en aras de consolidar la protección de la infraestructura vial, oleoductos y de la población civil en los cascos urbanos.⁴
- Para contrarrestar esta operación, las estructuras del ELN y las Farc recibieron refuerzos provenientes de Casanare con el frente 28 de las Farc y el José David Suárez del ELN.⁵
- Entre 2006 y 2008, se observa la reconfiguración de la dinámica de la confrontación por cuanto el número de contactos armados emprendidos por la

² IBID

³ IBID

⁴ Fuente: boletines diarios del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, procesado por el observatorio del programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

⁵ IBID.

Fuerza Pública supera las acciones iniciadas por los grupos irregulares en la zona. Es así como en estos tres años se registra un total de 128 contactos armados frente a 49 acciones ejecutadas por los grupos armados ilegales.⁶

- Dicha dinámica podría estar relacionada con la intensificación de las operaciones adelantadas por las tropas de la XVII Brigada del Ejército para retomar el control de la zona y la desmovilización del bloque Vencedores de Arauca de las autodefensas. Prueba de esta ofensiva fue la baja alias Gabino, principal cabecilla de la columna móvil Alfonso Castellanos del bloque oriental de las Farc en agosto de 2008 por parte de tropas de Brigada Móvil No. 5 y de la Brigada XVII adscritas a la Segunda División del Ejército Nacional.⁷
- Las acciones violentas a las cuales recurrieron los grupos armados ilegales durante el período en estudio fueron mayoritariamente los actos de terrorismo con 134, seguido de los hostigamientos con 82 casos, acciones de piratería terrestre con 56, emboscadas con 33 y los ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública con 16.⁸
- En cuanto a la autoría de estas acciones, en un 43% (137) se señala a las Farc como responsables, un 38% (121) señala a grupos armados por identificar, un 11% (35) a al ELN, un 6% (19) a guerrillas no identificadas, un 2% (5) a las autodefensas y en un 1% (4) se señala a las Farc y ELN de manera conjunta.⁹
- Las acciones armadas de los grupos armados irregulares se concentraron en Tame (45% con 146 acciones), Saravena (34% con 109), y Arauca (21% con 66) en el período considerado.¹⁰
- En lo atinente a los contactos armados, se concentraron en los municipios de Tame (230), Saravena (58) y Arauca (19).¹¹
- En cuanto a los grupos enfrentados, el 74% de los contactos armados se libró contra las Farc, el 20% contra el ELN, el 3% contra grupos de autodefensas y el 3% contra guerrillas no identificadas.¹²

⁶ IBID.

⁷ Fuente: boletines diarios del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, procesado por el observatorio del programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

⁸ IBID.

⁹ IBID.

¹⁰ IBID

¹¹ IBID

¹² IBID

**Evolución de la intensidad de la confrontación en los municipios ubicados
en Guainía, Guaviare, Meta y Vichada
2003 -2008**

Fuente: Boletines diarios del Das

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

- Por otro lado, en los municipios habitados por la etnia Sikuani en los departamentos de Guainía, Guaviare, Vichada y Meta se presentaron un total de 161 contactos frente a las 63 acciones ejecutadas por los grupos armados ilegales durante el mismo período. Dichas cifras evidencian que la iniciativa de la confrontación armada estuvo asumida por las fuerzas del Estado en estos departamentos.¹³
- Entre 2003 y 2008, el número de contactos emprendidos por la Fuerza Pública registró un incremento del 123%, al pasar de 19 en el primer año a 44 en el último. En lo atinente a las acciones iniciadas por los grupos armados ilegales, se observó un descenso del 83% entre los mismos años, al pasar de 18 en el primer año a 3 en el último.¹⁴
- Entre 2003 y 2005 el número de acciones iniciadas tanto por la Fuerza Pública como aquellas cometidas por los grupos armados ilegales se encontraban más o menos en el mismo nivel. No obstante, a partir de 2006 se presenta un aumento del 83% en el número de combates iniciados por la Fuerza Pública, al pasar de 24 contactos en 2006 a 44 en 2008. Esta situación está relacionada con las desmovilizaciones individuales y colectivas de las autodefensas que previamente operaban en la zona y el inicio de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, específicamente del Plan Patriota. Dentro de este marco, se desarrolló la operación JM, que tiene como objetivo principal la recuperación del

¹³ Fuente: boletines diarios del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, procesado por el observatorio del programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

¹⁴ IBID.

control militar en esta zona del país. Adicionalmente, el departamento de Guaviare se convirtió en uno de los principales centros de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, compuesta por miembros de la Armada, el Ejército y Fuerza Aérea.¹⁵

- Cabe mencionar que las acciones violentas a las cuales recurrieron los grupos armados ilegales durante este período incluyeron actos de terrorismo (31), hostigamientos (21), acciones de piratería terrestre (5), emboscadas (5) y un ataque contra instalaciones de la Fuerza Pública.¹⁶

Evolución de la tasa de homicidio nacional y de la región habitada por los Sikuni 2003-2008

Fuente: Cic- Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

- Durante el período de estudio, se presentó un descenso del 16% en la tasa de homicidio en la zona habitada por los Sikuni, al pasar de 108.02 homicidios por cien mil habitantes (hpch) en 2003 a 91.15 hpch en 2008. Asimismo, se evidencia que a lo largo de estos seis años, la tasa de la región habitada por los Sikuni superó constantemente el promedio nacional.¹⁷
- Se puede observar que la tendencia de la tasa regional es decreciente entre 2003 y 2005, en la medida en que se presenta un descenso del 31%, pasando de 108.02 hpch en 2003 a 74.67 hpch en 2005. Lo anterior coincide con la

¹⁵ Fuente: boletines diarios del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, procesado por el observatorio del programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

¹⁶ IBID.

¹⁷ Las tasas de homicidio entre 2003 y 2005 fueron calculadas con base en las proyecciones del Censo Dane de 1993, mientras que las de 2006, 2007 y 2008 fueron calculados con base en las proyecciones realizadas por el Dane a partir del censo 2005.

ofensiva de la Fuerza Pública desarrollada durante la misma época en el marco de la ejecución del Plan Patriota en aras de recuperar territorios y neutralizar miembros de los grupos armados ilegales.¹⁸

- No obstante, entre 2006 y 2007, se observa un ascenso del 16% en la tasa regional, al pasar de 81.44 a 95.37 hpch, para luego registrar una leve baja del 4% en 2008. Lo anterior podría estar relacionada con la reconfiguración de la confrontación armada en la zona. En otras palabras, la creciente actividad de las nuevas bandas criminales se tradujo en un incremento en la tasa de homicidio.¹⁹
- En cuanto a los móviles de los homicidios acaecidos en la región habitada por la etnia Sikuani, que durante el período en estudio, el 51% de éstos (1.030) estuvieron relacionados con la confrontación armada, el 30% (611) con otros móviles y el 19% (387) se relacionó con la delincuencia común y organizada. La mayoría de los asesinatos (60%) se relacionó con la confrontación armada. No obstante, entre 2006 y 2007 existe una reconfiguración de la dinámica del homicidio en la zona, pues el 64% de éstos correspondieron a otros móviles y a enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la delincuencia común y organizada. Finalmente, en 2008 se observa una situación muy pareja, puesto que el 44% y el 37% de los homicidios tuvieron que ver con la confrontación armada y la delincuencia común y organizada respectivamente.²⁰
- En términos absolutos, entre 2003 y 2008, se registraron un total de 2.028 muertes. Durante el mismo período, el número de homicidios en la región disminuyó en un 30%, al pasar de 442 homicidios en 2003 a 309 en 2008.²¹

¹⁸ Fuente: boletines diarios del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, procesado por el observatorio del programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

¹⁹ IBID.

²⁰ IBID.

²¹ IBID.

Homicidios por municipio en la región habitada por la etnia Sikuani 2003-2008

MUNICIPIO	2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	Homicidios	Tasa	Homicidios	Tasa	Homicidios	Tasa	Homicidios	Tasa	Homicidios	Tasa	Homicidios	Tasa
PUERTO GAITAN	15	69,21	7	31,53	10	44,00	22	125,96	25	142,00	10	56,40
INIRIDA	2	7,64	1	3,71	9	32,48	7	38,71	2	10,93	3	16,21
SANTA ROSALIA	0	0	0	0	0	0	3	90,42	1	29,53	1	28,95
CUMARIBO	0	0	4	6,86	1	1,67	27	91,56	32	105,73	32	103,04
LA PRIMAVERA	0	0	0	0	1	6,62	8	72,50	13	113,40	3	25,20
PUERTO CARREÑO	2	11,87	1	5,78	0	0	13	96,05	4	29,02	4	28,51
ARAUCA	60	70,40	46	52,35	32	35,34	17	22,11	10	12,78	11	13,83
SARAVENA	105	229,01	59	124,79	56	114,95	38	87,86	50	114,33	71	160,58
TAME	191	343,87	198	345,71	136	230,46	59	122,66	104	213,87	90	183,12
SAN JOSE DEL GUAVIARE	67	106,92	28	43,56	42	63,70	52	94,44	60	106,89	73	127,63
MIRAFLORES	0	0	25	117,67	36	165,22	21	180,88	17	142,71	11	90,04

Fuente: CIC- Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

Casos y Víctimas de masacres en los municipios de la región habitada por los Sikuani 2003 - 2008

MUNICIPIO	2003		2004		2006	
	Casos	Víctimas	Casos	Víctimas	Casos	Víctimas
SAN JOSE DEL GUAVIARE	0	0	0	0	1	4
SARAVENA	2	9	0	0	0	0
TAME	4	17	1	16	0	0

Fuente: Cic - Policía Nacional.

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

Desplazamiento forzado en la región habitada por los Sikuani 2003-2008

Fuente: Sipod-Acción Social

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

- Entre 2003 y 2008, se reportaron 58.384 personas desplazadas en los 11 municipios donde está ubicado el pueblo Sikuani. Asimismo, se presentó un aumento del 45% en el período de estudio, al pasar de 7.873 en el primer año a 11.431 en el último.²²

²² Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – Acción Social -, procesado por el observatorio del programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

- A partir de 2004, existe una tendencia al alza, que se sostiene hasta 2007, año en que se presenta el pico del período, con un total de 12.628 personas expulsadas.²³
- durante el 2004, la mayoría de las personas desplazadas fueron expulsadas de los municipios de Tame, San José del Guaviare, Cumaribo y Arauca. En el caso de Tame y Arauca, el alza que se observa a partir de 2004 se relaciona principalmente con el incremento en la intensidad de la confrontación que se presenta en esta zona, que se refiere entre otros a la disputa que se presenta entre las Farc y el ELN por el dominio del territorio. En lo atinente a los municipios del Guaviare, el incremento de personas expulsadas se debe principalmente a la incursión del grupo armado ilegal bajo el mando de alias Cuchillo para recuperar territorio antes dominado por las AUC y las cuales estaban en disputa entre los frentes 1 y 7 de las Farc.²⁴
- Por otro lado, el alza en materia de expulsión en Vichada se debe principalmente a la reconfiguración de la dinámica de la confrontación armada en este departamento, puesto la desmovilización de las autodefensas, el afán de las Farc por recuperar territorios previamente dominados por las autodefensas y el ingreso de las bandas emergentes, al el mando de alias Cuchillo, así como de ex - integrantes del BCB provenientes de Urabá, narcotraficantes y la delincuencia común. Sin embargo, en el año 2008 se observa un ligero descenso del 9% en el número de personas desplazadas, al pasar de 12.628 personas desplazadas a 11.431.²⁵
- Para el período considerado, la mayoría de los desplazamientos (86%) se concentró en los municipios de Tame (37% con 21.395 personas), San José del Guaviare (30% con 17.076), Cumaribo (con 11% con 6.304) y Saravena (9% con 5.364 personas). Vale la pena señalar que estos municipios fueron a su vez aquellos con mayor actividad en materia de intensidad de la confrontación en la zona considerada.²⁶

²³ Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – Acción Social -, procesado por el observatorio del programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

²⁴ IBID

²⁵ IBID

²⁶ IBID

**Desplazamiento forzado de minorías indígenas y otra población en los municipios habitados por Sikuani
2003 – 2008**

Fuente: Sipod-Acción Social

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

- En la zona habitada por la etnia Sikuani, el porcentaje de indígenas desplazados durante todo el período fue del 6% (3.489) del total.²⁷
- En los seis años considerados, se presentó un aumento del 79% en este ámbito, al pasar de 461 indígenas expulsados en 2003 a 824 en 2008, al año pico en materia de expulsión de personas indígenas.²⁸
- El incremento más notorio en el número de víctimas de desplazamiento ocurrió en San José del Guaviare, al subir de 96 víctimas en 2007 a 934 en 2008. Este fuerte incremento en las cifras está relacionado con el desplazamiento de un gran número de indígenas de la etnia Guayabero y Nukak Makú que se generó en septiembre de ese año, como consecuencia de la intensificación de los combates entre la Fuerza Pública y las acciones desplegadas por los grupos armados al margen de la ley en la zona, que utilizan los resguardos indígenas de estas comunidades como zona de retaguardia, establecen control social y reclutan forzosamente a algunos de sus miembros.²⁹
- Para el período considerado, la mayoría de los desplazamientos de población indígena (95%) se presentó en los municipios de Cumaribo (32%

²⁷ Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – Acción Social -, procesado por el observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

²⁸ IBID.

²⁹ IBID

con 1.108 indígenas), San José del Guaviare (22% con 758), Tame (19% con 661), Inírida (13% con 457 indígenas) y Miraflores (10% con 339).³⁰

Homicidios de indígenas pertenecientes a la etnia Sikuani 2003 – 2008

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

- Entre 2003 y 2008, fueron asesinados un total de 9 indígenas pertenecientes a esta etnia, el 78% (7) en el año 2008, el año más álgido en este ámbito.³¹
- Entre 2003 y 2004, se presenta un ascenso del 100% en el número de indígenas Sikuani asesinados, al pasar de 0 a 2. Los hechos tuvieron lugar el 2 de enero de ese año, cuando dos indígenas de esta etnia, una mujer y su pequeña hija, fueron ultimadas por autores desconocidos en jurisdicción de Palmarito, municipio de Cumaribo.³²
- Sin embargo, a partir de 2005, el número de indígenas asesinados desciende a cero. Dicha tendencia a la baja se sostiene durante los dos años siguientes hasta que es interrumpida en 2008, cuando se presenta el pico del período y se registran un ascenso del 100%, al pasar de 0 a 7 casos de homicidios de indígenas de esta etnia. En efecto, el 11 de enero de 2008, dos indígenas Sikuani fueron ultimados por las Farc en el municipio de Tame (Arauca), lo cual generó el desplazamiento de alrededor de 260 de indígenas de las comunidades La Esperanza y Caños Claros, de acuerdo con Ascatidar, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca.³³

³⁰ Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – Acción Social -, procesado por el observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República.

³¹ Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

³² IBID.

³³ IBID

- En mayo de ese mismo año, en la vereda Puerto Arturo de Saravena, desconocidos asesinaron con arma de fuego al miembro del resguardo indígena el Vigía de Arauquita, Jairo Sepúlveda Rico.³⁴
- En julio, cuatro indígenas Sikuni más fueron ultimados por desconocidos en una zona distante del caserío de Barranquillita, municipio de Miraflores, en el departamento de Guaviare.³⁵
- Los municipios donde se registraron la mayoría de los hechos en este período fueron Miraflores con 4 (44% del total), Cumaribo con 2 hechos (22%), Tame con 2 hechos (22%) y Saravena con 1 (11%).³⁶
- Tanto la violencia producto de la confrontación armada como el desplazamiento forzado han generado la ruptura de tradiciones culturales y familiares de la etnia Sikuni, en la medida en que ha venido debilitando el tejido social y afectado la transmisión y continuidad de las prácticas culturales de esta etnia.³⁷

3. Progreso de las solicitudes de restitución de tierras en el periodo (1990-2007) de la comunidad Sikuni en el municipio de Mapiripán (Meta)

En el relato que sigue se reflejan las afectaciones territoriales sufridas antes de 1991 por la comunidad indígena del Resguardo de Caño Ovejas, que aunque no quedan cobijadas por el ámbito temporal definido en el Decreto-Ley 4633 de 2011, sí son un insumo indispensable para la cabal comprensión de las afectaciones que se estaban produciendo a partir del 1 de Enero de 1991 e inclusive las que se producen con posterioridad a esta fecha.

En 1979 y con motivo del estudio socioeconómico de la parcialidad indígena Sikuni de Caño Ovejas (Tsuwakia) realizado por el funcionario de INCORA Antonio Faccini, la parcialidad indígena solicita ante INCORA el reconocimiento de un territorio cuyos límites son: por el sur: el Rio Guaviare, partiendo de la desembocadura del Caño Trin en el Rio Guaviare, el cual sigue por este aguas abajo hasta llegar a la desembocadura del Caño Yamú se remonta el Caño Yamú hasta su cabecera, de allí se dirige en al noroeste por la carretera que une a Mapiripán (Meta) con San Martín (Meta), el cual se

³⁴ Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República

³⁵ IBID.

³⁶ IBID

³⁷ IBID

sigue dicha carretera con dirección a San Martín (Meta), hasta llegar al caño arenas (tajetabonajato) dicha carretera está situada en la división de las aguas de la cuenca del Caño Ovejas (Meta) y el Caño Jabón (Meta) y en ella se encuentra el nacimiento del Caño Arenas (tajetabonajato), donde dicho caño aguas abajo hasta su desembocadura en el caño tsuwakia (Caño Ovejas) de allí se remonta el Caño Ovejas (Meta) hasta encontrar la desembocadura de Caño Águila (Meta) (kotsala najato) en el Caño Ovejas, se remonta dicho Caño Águila (Meta) hasta su cabecera situada en la carretera que une el Trin con San Martín (Meta) que sigue por dicha carretera en dirección sur hasta encontrar las cabeceras de caño Trin en las inmediaciones de masiferetsuto, de allí sigue aguas abajo por el caño Trin hasta su desembocadura en el río Guaviare y cierra.

Dicho territorio no incluye todo el territorio ancestral indígena pero representa la parte mínima del mismo que las 75 personas que lo habitaban necesitaban para sobrevivir, teniendo en cuenta que el territorio que se solicitó es de unas 25.000 hectáreas, que la unidad agrícola familiar era en la época de constitución del resguardo de 3000 hectáreas, que el mismo venía siendo utilizado por la comunidad indígena desde época ancestral y hacía parte de su propiedad y que en el territorio solo había dos colonos ausentistas que pretendían unas 15.000 hectáreas en las cuales no ejercían posesión directa ni tenían mejoras.

Sin embargo el 20 de Diciembre de 1982 INCORA, en vez de reconocer a los indígenas el territorio solicitado, tan solo reconoce al mismo 1720 hectáreas divididas en dos globos comunicados, resolución 139 de 1982 por la cual se constituye el resguardo de Caño Ovejas, en la que se evidencia la ilegalidad manifiesta de dicha titulación que relega a los indígenas divididos en 25 familias, a vivir en el terreno que el propio INCORA considera apropiado para poco más de media familia (la resolución de INCORA N° 042 de 1962, sube a 3000 hectáreas la superficie de adjudicación máxima por familia, en el Municipio de San Martín al que en aquel momento pertenecía la región), además desconoce gran parte de los Territorios en los que los indígenas han ejercido la propiedad y la posesión material, real, continua, pública y pacífica por más de 70 años, mediante cultivos tradicionales, habitación en comunidades, actividades de caza, pesca y ceremonias espirituales. Además en ciertas partes del resguardo los límites son inidentificables lo cual ha facilitado la invasión de parte del mismo por cultivadores de coca.

El 14 de Abril de 1990, INCORA compra con destino a la ampliación del resguardo indígena de Caño Ovejas dos globos de terreno de 1611 hectáreas y 2505 hectáreas,

por un valor de \$20.002.471 y \$38.782 598, los predios fueron entregados a la comunidad indígena de Caño Ovejas según consta en acta de 21 de Abril de 1990, si bien hasta el presente momento no hacen parte de dicho resguardo indígena, ya que no se ha producido la ampliación del INCORA.

Pese a los hechos antes dichos, el 31 de Diciembre de 1990, la comunidad indígena de Caño Ovejas ocupaba mediante actividades de caza, pesca, recolección, culturales y agrícolas un territorio cuyos límites son: desde la desembocadura de caño Newuti o caño Tigre en el Guaviare se remonta el caño Tigre hasta su cabecera situada en la carretera que se dirige del Trin a Villavicencio; de ese punto se remonta la carretera hasta encontrar el nacimiento del caño Águila; de este punto se desciende el caño Águila hasta su desembocadura en el caño Ovejas; se desciende por este hasta encontrar la desembocadura del caño la Virgen en el caño Ovejas; se prosigue por el caño la Virgen aguas arriba hasta su nacimiento en la carretera que va de Villavicencio hasta Mapiripán; se continúa por la misma en dirección Mapiripán hasta la bifurcación de la misma en dos; se sigue por la bifurcación más oriental y que lleva a puerto Elvira hasta el nacimiento del caño Candelario; de allí se desciende por el mismo aguas abajo hasta su desembocadura en el caño Jabón; de allí se desciende por dicho caño aguas abajo hasta encontrar la boca del caño Docobia; de este punto se remonta este caño hasta su nacimiento en la carretera que va desde Villavicencio a Mapiripán; se continúa por la misma en dirección Mapiripán hasta el pueblo de Mapiripán situado en la costa del río Guaviare; de allí se remonta el río Guaviare aguas arriba hasta encontrar la desembocadura de Caño Tigre o Newuti bajado en el río Guaviare y cierra. (levantar mapa ojo importante. Otro de lo que se solicita como resguardo en el marco de la restitución)

El 14 de Agosto de 1991, terceros ajenos a la comunidad indígena y que no ejercían posesión en la zona, escrituran la finca el Viso la cual tiene una falsa tradición, sobre la cual no hay adjudicación de INCORA y sobre la que la comunidad venía ejerciendo históricamente posesión y que había solicitado en ampliación del resguardo.

En 1995 la comunidad indígena reitera su solicitud de ampliación y se presentan diversos intentos de invasión del territorio indígena y del resguardo a consecuencia de la siembra de cultivos ilícitos El 12 de Abril de 1995 el propio Incora en comunicación interna admite la necesidad de ampliar el resguardo El 9 de Mayo de 1995 la comunidad indígena de Caño Ovejas reitera su solicitud de ampliación.

En 1996 INCORA Publica el “Estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras para la ampliación del resguardo indígena de “Caño Ovejas” ubicado en la jurisdicción del Municipio de Mapiripan-Meta” en dicho informe se constata el uso de la comunidad indígena de los predios comprados por INCORA con destino a la ampliación del resguardo de Caño Ovejas y recomienda la ampliación inmediata del resguardo con los mismos, sin embargo hasta la fecha no ha habido ampliación, las dilaciones en el proceso de ampliación del resguardo que INCORA justifica en el conflicto armado.

A finales de 1996 y durante 1997 y 1998 se produce una gran ofensiva paramilitar y las masacres de Mapiripan y Caño Jabón (ubicado este último en el mismo municipio de Mapiripan) Tras estos hechos el trámite de ampliación del resguardo de Caño Ovejas, queda paralizado, si bien en 1997 se produce la titulación ilegal de INCORA de varios predios a terceros que no ocupaban la zona y cuyos predios estaban destinados a la ampliación del resguardo de Caño Ovejas.

Desde el 2001 se ha tratado en repetidas ocasiones de repetir el estudio socioeconómico que permita ampliar el resguardo Caño Ovejas, sin embargo en varias ocasiones INCORA e INCODER se han justificado en la situación de violencia en la zona para no ampliar el resguardo.

El 2 de Diciembre de 2002 una comisión indígena viaja a Bogotá para solicitar la ampliación del resguardo de Caño Ovejas, el coordinador del programa indígena del Incora Regional Meta, Martín Cardozo, Certifica los predios Camaura y Camaguay se encuentran en posesión de la comunidad indígena desde 1990 y que la ampliación del resguardo de caño ovejas con las nuevas tierras “ no se llevara a cabo hasta cuando la situación económica del INCORA y los factores de orden público lo permitan”, es decir el propio INCORA reconoce que los grupos armados ilegales se oponen a la ampliación del resguardo de caño Ovejas.

El 2 de Mayo de 2003 el INCORA titula en un proceso de adjudicación de Baldios 1584 hectareas con 123 metros cuadrados, parte del territorio indígena en proceso de ampliación a la colona ajena a la comunidad indígena: Marleny Hernanadez c.c: 20.410.502 de Bogotá. El predio es titulado a dicha colona con el nombre de Los Romanceros mediante resolución de adjudicación de Incora N° 0206 del 2 de Mayo de 2003. La acción es totalmente ilegal, en primer lugar porque el predio no era un baldío Nacional, sino un predio de propiedad indígena por ocupación histórica, en donde existía ocupación de dos comunidades indígenas Corozito y Tsapín además de cultivos de las mismas y territorios de caza y pesca de los mismos y estaba destinado a la ampliación

del resguardo de Caño Ovejas, por otro lado, se constata que dicho predio nunca fue mejorado por la colona beneficiaria de la adjudicación y que incumple los requisitos para la adjudicación de baldíos consignados en la ley 160 de 1994 y la Ley 21 de 1991. Al parecer y de acuerdo a los hechos y a lo consignado en el acta de INCORA de 2 de Diciembre de 2002, los grupos armados ilegales que si se oponían a la ampliación del resguardo indígena de Caño Ovejas con el predio Camaguay, no se opusieron a la titulación parcial del mismo con el nombre de Los Romanceros en favor de la colona ajena a la parcialidad indígena Marleny Hernandez.

Tras estos hechos en diversas ocasiones la fuerza pública desde 1983 ha realizado acciones policivas para desalojar a la comunidad indígena de los territorio ancestralmente ocupados por estos predio, desplazando a las comunidades indígenas ubicadas fuera y dentro del resguardo indígena, despojando a la comunidad indígena del uso agrícola que venía ejerciendo, del uso espiritual del cementerio indígena en el ubicado y del uso como territorio de cacería del mismo, el hecho está directamente relacionado con el abandono de la comunidad indígena Tsapín ubicada en las cercanías del límite noroccidental del predio, sin embargo y pese a los hechos descritos todavía en el presente la comunidad indígena posee posesión de dichos terrenos.

El 3 de Marzo de 2003 en comunicación interna Incora reconoce la necesidad urgente de ampliar el resguardo.

El 18 de Marzo de 2004 INCORA reitera la necesidad de ampliar el resguardo de Caño Ovejas pero admite que las dificultades de la conclusión del proceso alegando “impedimentos de orden público” es de constatar que en esos años se legalizan varios predios particulares sobre los mismos territorios solicitados por los indígenas en ampliación, para cuyo estudio parece no haber habido oposición ni impedimentos por problemas de orden público.

9 de Agosto de 2004 Incora saca un Auto que ordena la realización de un nuevo estudio socioeconómico para la ampliación del resguardo pero este no se realiza.

26 de Octubre de 2006 se reitera la petición de ampliación del estudio socioeconómico.

13 de Marzo de 2007 Efraín Rodríguez López líder de la comunidad viaja a Villavicencio para reiterar su solicitud de ampliación.

10 de Septiembre de 2007 se publica Auto para la realización del estudio socioeconómico que permita la ampliación del resguardo de caño Ovejas.

10 de Octubre de 2007 INCODER realiza el estudio socioeconómico para la ampliación del resguardo indígenas de Caño Ovejas en dicho estudio se constata la urgente necesidad de ampliar el resguardo de Caño Ovejas, sin embargo hasta la fecha no se ha concluido dicha ampliación y dado que ya pasaron más de cinco años desde la conclusión de dicho estudio socioeconómico, el mismo ha caducado y hay que repetirlo, con lo cual nuevamente se ha vuelto a desperdiciar el trabajo y el dinero público para un trámite que no se ha concluido.

4. Propuesta de intervención de una política pública que logre hacer efectiva la restitución de tierras de la comunidad indígena Sikuani.

Existe evidentemente falta de formalización de los derechos territoriales étnicos. Como se describió a lo largo de la investigación, existen solicitudes de titulación de tierras que se han afectado por las incertidumbres institucionales del – INCORA – INCODER.

A pesar de la crisis en sus territorios, los grupos étnicos, han optado por la permanencia cultural y la defensa territorial pacífica en función de la protección de su autoridad, autonomía e integridad.

Las comunidades étnicas hoy en día realizan esfuerzos importantes por sostener las características que hacen que sean diferentes del resto de la población de este país, entendido lo anterior como lo relacionado con la lengua, costumbres, formas tradicionales de cosecha, caza, cosmovisión etc. Este tipo de desplazamiento no solo afecta a las familias y líderes de la comunidad que deben abandonar sus territorios, sino a las propias comunidades, ya que los resguardos tienen fuertes vínculos étnicos, territoriales y culturales, lo que desencadena necesariamente en una alteración de su estructura social. Las afectaciones resultado del conflicto armado, debilitan la integridad étnica de los pueblos como sujetos colectivos de derechos.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 63, reconoció el derecho inalienable, imprescriptible e inembargable de las comunidades indígenas al territorio, en los siguientes términos, “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Por su parte, el artículo 329 señaló que “la conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial, y su delimitación se hará (...) con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial. “Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable”.

De otro lado, el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia dispuso que los territorios indígenas están gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades de conformidad con la Constitución y la ley.

El ordenamiento jurídico colombiano, en desarrollo de los artículos constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, ha establecido varias regulaciones sobre los territorios indígenas. En virtud de estas regulaciones, estos pueblos tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras, a autodeterminarse y autogobernarse según sus creencias y prácticas tradicionales dentro de sus jurisdicciones, y a gozar de protección para subsistencia en un territorio libre de interferencias de terceros, entre otras garantías.³⁸

La Ley 135 de 1961 dispuso que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, a solicitud de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, podía constituir resguardos de tierras, en beneficio de los grupos o tribus indígenas que no los posean. Igualmente, se estableció que la adjudicación de terrenos baldíos ocupados por indígenas a personas naturales, sólo sería procedente con el concepto favorable de la División de Asuntos Indígenas.

Mediante el Decreto 2001 de 1988, se reglamentó la constitución de resguardos indígenas a favor de grupos o tribus ubicados dentro del territorio nacional, los cuales son entendidos como:

“(...) una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una comunidad o parcialidad indígena, que con un título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de éste y de su vida interna por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.”

³⁸ IBID Sentencia T-379/14 Corte Constitucional de Colombia

En otras palabras, según esta disposición, un resguardo es una forma de propiedad colectiva de la tierra. Igualmente, en el citado acto se reguló el procedimiento para constituir los resguardos en terrenos baldíos y sobre predios y mejoras del Fondo Nacional Agrario.

Mediante Decreto 2164 de 1995 definió los resguardos:

“Artículo 21. Naturaleza jurídica. Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva, goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio.

Parágrafo. Los integrantes de la comunidad indígena del resguardo no podrán enajenar a cualquier título, arrendar por cuenta propia o hipotecar los terrenos que constituyen el resguardo”.

De esta manera, pueden observarse los intentos del Estado Colombiano para procurar la protección de los grupos minoritarios y garantizar su permanencia, no sólo física sino económica, social y culturalmente de conformidad con los lineamientos internacionales y constitucionales en la materia, protegiendo los resguardos indígenas.

La violación de dicho derecho es por tanto una violación de los derechos constitucionales de la parcialidad indígena de Caño Ovejas.

4.1 Factores para que la Política Pública de Reconocimiento al Desplazamiento y la Restitución de Tierras sea Efectiva.

El hecho de que los resguardos indígenas sean dueños legales del territorio, marca una mayor confianza como sitio de refugio, por lo tanto lo que se pretende mostrar en esta parte, a partir de las indicaciones y propuestas dadas en los últimos años por la Agencia de la Organización de Naciones Unidas – ONU- para los refugiados, la cual consta en orientar a los gobiernos hacia la construcción y puesta en marcha de una política pública del reconocimiento para la prevención, protección y atención al desplazamiento

indígena en Colombia, teniendo como metas fundamentales para la puesta en marcha de la estrategia las siguientes cuatro premisas:

- 1) El reconocimiento jurídico;
- 2) El reconocimiento institucional;
- 3) El reconocimiento de las organizaciones y autoridades indígenas, y la construcción de su papel activo en la búsqueda de soluciones duraderas; y
- 4) El reconocimiento a la necesidad de un seguimiento sistemático a la política pública de atención y prevención al desplazamiento indígena forzado.

4.1.1 Reconocimiento jurídico: Promoción de un marco jurídico de protección para los pueblos indígenas desplazados y en riesgo de desplazamiento³⁹

Las principales acciones a considerar para el reconocimiento jurídico la de los pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento según (ACNUR, 2006) son:

Fortalecer la consolidación y aplicación del marco normativo vigente, y la adopción de normas en el nivel nacional y local para la protección y reparación de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas desplazados y en riesgo de desplazamiento.

Promover la provisión y difusión de información, asesoría jurídica y la formulación de propuestas para la consolidación de la normatividad específica en el Ministerio Público.

Promover la identificación de las falencias del sistema normativo a través de la sistematización de casos, el seguimiento del grado de cumplimiento efectivo de la norma y sus debilidades.

Fortalecer a las organizaciones indígenas a través del conocimiento de la norma para el análisis del marco jurídico y la promoción de la aplicación de la legislación.

Promover Directrices y Decretos de Atención Diferencial a la Población Indígena Desplazada.

³⁹ PONENCIA: COLOMBIA, DESPLAZAMIENTO INDÍGENA Y POLÍTICA PÚBLICA: PARADOJA DEL RECONOCIMIENTO Oficina del ACNUR en Colombia San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Mayo 17 de 2006

Fortalecer el derecho consuetudinario o propio para la prevención, protección y atención al desplazamiento indígena.

Promover la adopción de Planes Integrales Únicos de Restablecimiento (PIU's) como Ordenanzas y Acuerdos departamentales y municipales con enfoque diferencial étnico.

Propiciar la formulación de Decretos Municipales con enfoque diferencial étnico en función de la declaratoria de inminencia de desplazamiento en comunidades sin resguardos o territorios colectivos no constituidos o en proceso de constitución.

4.1.2 Reconocimiento institucional: Fortalecimiento Institucional y de Políticas Públicas.⁴⁰

El Reconocimiento institucional debe apoyar el diseño y desarrollo de un enfoque diferencial étnico transversal a la política pública de prevención, protección y atención a la población desplazada y en riesgo de desplazamiento Comprende:

La identificación plena y por grupo étnico de los indígenas desplazados en los sistemas de información sectoriales de las instituciones del orden nacional y local. Ello implica: i) el fortalecimiento del acceso de los indígenas desplazados al SUR, puerta de entrada al reconocimiento y a la protección; ii) el monitoreo de los datos estadísticos referentes al acceso al SUR; y iii) el cruce interinstitucional de bases de datos sectoriales que permite la revisión de las rutas de acceso a derechos.

La descentralización y construcción concertada con los pueblos indígenas de una política de prevención, protección y atención al desplazamiento indígena, con acciones afirmativas, que haga parte del Plan Nacional de Atención y destine recursos específicos para ello.

La dinamización de los espacios de consulta y concertación previstos por ley para los grupos étnicos (Mesa Permanente de Concertación-, Comisión Nacional de Tierras y Comisión Nacional de Derechos Humanos- Decretos 1397 y 1396 de 1997-).

La transversalización del enfoque diferencial étnico en la planeación y ejecución de proyectos en instituciones del Estado, en función de la realización de: i) el fortalecimiento de la participación indígena en el Concejo Nacional, los comités municipales y

⁴⁰ PONENCIA: COLOMBIA, DESPLAZAMIENTO INDÍGENA Y POLÍTICA PÚBLICA: PARADOJA DEL RECONOCIMIENTO Oficina del ACNUR en Colombia San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Mayo 17 de 2006

departamentales; iii) la formulación de PIU's con enfoque diferencial; iv) la adopción de estrategias de atención diferencial en las Unidades de Atención a la Población Desplazada (UAO's) que contemplen los problemas de comunicación en contextos interculturales; v) la formulación de Planes de Contingencia municipales y departamentales con perspectiva diferencial; y vi) el diseño de Planes de Restablecimiento con enfoque diferencial étnico.

El fortalecimiento de las políticas públicas sectoriales con enfoque transversal, en particular: i) políticas de educación intercultural en emergencias complejas; ii) protección a territorios colectivos; iii) políticas de generación de ingresos que respeten las dinámicas de la economía de las minorías étnicas; iv) políticas interculturales e integrales de atención en salud sexual y reproductiva; y v) políticas de vivienda adecuada culturalmente.

El fortalecimiento de políticas territoriales con enfoque diferencial étnico a través de: i) la consolidación de acuerdos de voluntades de gobernadores y alcaldes; y ii) la articulación de los instrumentos de política pública territorial (Planes Integrales Únicos (PIU), Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes de Desarrollo, Planes de Vida y Presupuestos Anuales).

Otras actividades como: i) la formación de funcionarios públicos en enfoque de derechos y diferencial étnico; ii) la formulación de Proyectos Prácticos de Protección que contribuyan al incremento de la presencia del Estado en zonas de riesgo de desplazamiento y/o retorno con población indígena; iii) la puesta en marcha de campañas de documentación en territorios étnicos con la Registraduría General de la Nación.

4.1.3 Reconocimiento a las organizaciones y autoridades indígenas: promoción de la organización social, la participación y la concertación⁴¹

El reconocimiento al papel activo de las organizaciones y autoridades indígenas en la construcción de las soluciones, el diseño y puesta en marcha de políticas públicas para la prevención, protección y atención al desplazamiento indígena, busca fortalecer la

⁴¹ PONENCIA: COLOMBIA, DESPLAZAMIENTO INDÍGENA Y POLÍTICA PÚBLICA: PARADOJA DEL RECONOCIMIENTO Oficina del ACNUR en Colombia San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Mayo 17 de 2006

autonomía, el control territorial y la jurisdicción especial de las autoridades étnicas del nivel nacional y local.

Implica enfatizar las actividades de prevención a través del desarrollo de mecanismos que mitiguen las causas del desplazamiento, y las circunstancias que puedan originar cruces transfronterizos, garantizando el ejercicio del derecho a no ser desplazado, el derecho a desplazarse, el derecho a cruzar una frontera en búsqueda de protección, y en particular, el derecho al territorio base de la integridad cultural y supervivencia de los pueblos indígenas de Colombia.

Esto es posible mediante:

El apoyo a su capacidad de respuesta, autogestión, y coordinación frente al desplazamiento (dentro de sus territorios como fuera de ellos), a través de la construcción de diagnósticos, planes de contingencia y planes estratégicos de mediano y largo plazo en el marco de sus Planes de Vida, desde una visión propia y con perspectiva intercultural de los impactos.

La elaboración y ejecución de proyectos de fortalecimiento organizativo y el empoderamiento de las autoridades y organizaciones étnicas del nivel local, regional y nacional en el marco del SNAIPD en búsqueda de un sistema coordinado de representatividad y acción de las organizaciones y autoridades indígenas en los espacios de participación.

El fortalecimiento institucional para el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena y la prevención del desplazamiento forzado indígena.

La promoción de campañas temáticas con enfoque poblacional étnico y difusión de los instrumentos para la exigibilidad de derechos en radios comunitarias indígenas, la Unidad de Radio del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comunicaciones.

4.1.4 Reconocimiento a la necesidad de seguimiento a la política pública: Promoción de Mecanismos de Seguimiento y Control⁴²

⁴² PONENCIA: COLOMBIA, DESPLAZAMIENTO INDÍGENA Y POLÍTICA PÚBLICA: PARADOJA DEL RECONOCIMIENTO Oficina del ACNUR en Colombia San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Mayo 17 de 2006

Debe favorecerse el fortalecimiento del Ministerio Público y de las Autoridades Étnicas en los procesos de seguimiento y control de las acciones de atención y prevención al desplazamiento forzado. Ello implica:

La construcción de indicadores de seguimiento a la política pública con enfoque diferencial étnico, y la construcción de un sistema de seguimiento y control preventivo de la Procuraduría General de la Nación.

Realizar seguimiento a casos específicos de comunidades indígenas desplazadas, en riesgo de desplazamiento, o retornadas, incrementando la presencia estatal y la construcción de respuestas duraderas mediante el seguimiento y evaluación de los compromisos institucionales.

Otros factores que visibilizaron la debilidad de la política pública en la protección de las minorías étnicas del país para ese entonces fueron: i) el escaso desarrollo de los elementos y recomendaciones para un Plan de Acción del documento “Desplazamiento Indígena en Colombia” realizado por la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC), con el apoyo del ACNUR en el 2003; ii) la debilidad de participación de las autoridades étnicas en los espacios del SNAIPD en el nivel nacional y local; iii) el desconocimiento de las autoridades étnicas y en particular de las comunidades, del marco jurídico de protección al desplazamiento; y iv) la inexistencia de mecanismos de representatividad local, regional, nacional en la población indígena desplazada y organizaciones independientes y en menor grado de la población afro colombiana.

A finales de 2004, el “Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado 2002-2004” realizado por el ACNUR, fue conclusivo acerca de la “ausencia de un enfoque diferencial en las políticas públicas que reconozca, garantice y de respuestas adecuadas a los derechos y necesidades de los diferentes grupos de población afectada por el desplazamiento forzado, de acuerdo con criterios de género, edad y origen étnico”. El Balance, enfatizó el reto de incorporar un enfoque diferencial étnico en la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado.

ACNUR recomendó entonces: i) Convocar a las autoridades y organizaciones a las instancias de participación y decisión de políticas públicas y asegurar su equitativa participación ; ii) activar los espacios de consulta y coordinación con los pueblos indígenas (Mesa Nacional de Coordinación y Comisión Nacional de Derechos Humanos); iii) implementar la Directriz de Atención para la atención de población

indígena desplazada; iv) garantizar el trato equitativo para mujeres y hombres pertenecientes a grupos étnicos en la declaración; v) cualificar a los funcionarios públicos en el reconocimiento de las dificultades específicas de la población indígena al presentar la declaración; vi) desarrollar los instrumentos para garantizar rutas de atención diferencial en todas las fases del desplazamiento para pueblos indígenas y comunidades afro colombianas.

4.1.5 Retos⁴³

A pesar de la opción tomada por el movimiento indígena colombiano de permanecer en sus territorios, y la importancia estratégica del retorno, es fundamental trabajar ante todo por una solución duradera e integral que no ponga en riesgo a la población. Esto es, contemplar incluso temporalmente o hasta cuando sea necesario, la integración local en ciudades o la reubicación, con los consecuentes retos de protección.

La Atención Humanitaria de Emergencia debe ser adecuada culturalmente y deben revisarse los mecanismos actualmente utilizados para los pueblos indígenas, asegurando integralidad en la atención.

Es necesario pensar en formas apropiadas de educación intercultural y estrategias para garantizar la atención en salud en todas las fases del desplazamiento que incluyan el acceso a la medicina tradicional.

En síntesis, la construcción de una política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento forzado con enfoque diferencial étnico es un desafío vigente. Es posible afirmar que la multidimensionalidad de la Política de Reconocimiento del desplazamiento indígena en Colombia no ha sido abordada por el Estado de forma sistemática e integral. Más allá de la retórica, la operativización de este enfoque y la ausencia de una implementación armónica, metódica y eficaz, señalan verdaderos retos de tolerancia y ejercicio democrático de los que depende la realidad de la multiculturalidad e interculturalidad reconocida por la Constitución Política de Colombia.

⁴³ PONENCIA: COLOMBIA, DESPLAZAMIENTO INDÍGENA Y POLÍTICA PÚBLICA: PARADOJA DEL RECONOCIMIENTO Oficina del ACNUR en Colombia San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Mayo 17 de 2006

5. Referencias

Alexander, J. (2005). Pragmática cultural: un nuevo modelo de performance social. Revista Colombiana de Sociología.

Arango R. (2004) Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio: población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de los pueblos indígenas. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.

Barth, F. (1976) Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales. México, 1976

Bendix, R. (1977). Max Weber. En David Sills (Ed.), Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Volumen 10. España: Editorial Aguilar.

Castells, M. (1998). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol.2 El poder de la identidad. Ed. Alianza. Madrid.

Candau, J. (1998). Mémoire et identité. Presses Universitaires de France (PUF). París. (Versión en castellano memoria e identidad. Ed. Del Sol. Series Antropológicas. Buenos Aires.

Cannell, Ch. F.; Kahn, R.L. (1993). La reunión de datos mediante entrevistas. En: Festinger, L.;

Castro, L (2000). "Guahibo-Sikuani". En: ICCH. Geografía Humana de Colombia Región de la Orinoquía Tomo III, Volumen 1. Consultado en: <http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/geocol/guahib.htm>, el 10 de Julio de 2010.

Daly, K. (1997). Sustitución de la teoría de la etnografía: una visión posmoderna. Kansas, EEUU.

Defensoría del Pueblo. (2005). Sociedad de Emergencia: Acción colectiva y violencia en Colombia. Bogotá.

Duval, R. (1999). *Semiosis y Pensamiento Humano. Registros semióticos y aprendizajes intelectuales* (Myriam Vega Restrepo, trad.). Cali: Universidad del Valle, Instituto de Educación y Pedagogía.

Entrena, F. (1998). *Cambios en la construcción social de lo rural. De la autarquía a la globalización*. Tecnos. Madrid.

Flórez M, (2009) "La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible" Bogotá Red Revista Opera.

Galindo, L.J. (1998). *Sabor a ti: metodología cualitativa en investigación social*. Xalapa. Universidad veracruzana.

Guerrero, L. M. (s/d). *La entrevista en el método cualitativo*. En: <http://rehue.csociales.uchile.cl/genetica/cgo4.htm>.

Giménez, G. (1996). «Territorio y cultura». *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*. N.º 4, Colima (México).

Giménez, G. (2005). «La cultura como identidad y la identidad como cultura» Colima (México).

Hage, J. (1972). *Las técnicas y los problemas de la construcción de la teoría de la sociología*. Nueva York.

Ibáñez, A.M., y C. Jaramillo (2006). *Oportunidades de desarrollo económico en el posconflicto: propuestas de política*. Fedesarrollo. Bogotá, Colombia.

Ibáñez, A.M., A. Moya, y A. Velásquez (2006). *Hacia una política para la población desplazada en Colombia*. Informe final presentado a USAID.

Ibáñez, A.M. y A. Moya (2006). *¿Cómo El Desplazamiento Forzado Deteriora El Bienestar De Los Hogares Desplazados?: Análisis Y Determinantes Del Bienestar En Los Municipios De Recepción*. Documento CEDE 2006-26. Facultad de Economía. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

Ibáñez, A. M., y A. Moya (2007). *La población desplazada en Colombia: Examen de sus condiciones socioeconómicas y análisis de las políticas*

actuales. Informe final presentado a la Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD). Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, Colombia.

Ibáñez, A.M. y A. Velásquez (2007). Vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina y de los hogares pertenecientes a minorías étnicas ante el impacto del desplazamiento forzoso. Informe final presentado al Banco Mundial. Bogotá, Colombia

Investigaciones Sociales, N.º 13, págs. 277-299 Organización Nacional Indígena de Colombia (2002) Aspectos históricos, políticos, económicos, ambientales y culturales de la problemática de los pueblos indígenas y afrocolombianos Bogotá: ONIC.

Jaramillo, A., Villa, M. y Sánchez, L. (2004). Miedo y desplazamiento. Medellín: Corporación Región.

Katz, D (1994). Los métodos de investigación en ciencias sociales. México. Paidós

Martínez, M. (2008). "Segundo Informe: Indígenas de los Llanos del Casanare y Arauca: Sikuni. Wäpijiwi y Sáliba". Ministerio de Cultura–ICANH. Bogotá.

Mejía, J. (2004). «Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo».

Moreno, A (2009). "Décima Entrega Crónicas de la Diversidad". Ministerio de Cultura & El Tiempo, Bogotá. Consultado en: http://www.eltiempo.com/culturayocio/la-fortaleza-de-lossikuni-en-vichada-esta-en-mantener-su-lengua_6236668-1, el 10 de Julio de 2010.

Onic (2003). El desplazamiento indígena en Colombia, caracterización y estrategias para su atención y prevención en áreas críticas. Bogotá.

Pérez S. (2002). Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes. II técnicas y análisis de datos. Madrid: la Muralla S.A

Piñakwe J. (1997) Dirección General de Asuntos Indígenas DGAI - Ministerio del Interior, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y Ministerio de Justicia y del Derecho.

Ruiz O. (1996) Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.

Sánchez, E (2004). Los Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del nuevo milenio. DNP - DDTs. Bogotá.

Suárez, C (2008). Ministerio de Cultura - ICANH. "Informe sobre la Integridad Cultural de los Pueblos Yukpa, Chimila, Wiwa, Sikuani y Saliba". Bogotá.

Taylor, S.J.; Bogdan, R. (1996). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona, Paidós.

Unhcr-Acnur (2004). Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia. Colombia.

Weber, M. (2002). Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica

Wolcott, H. F. (1994). La redacción de la investigación cualitativa. Newbury, EEUU.